

Los Grupos Armados al Margen de la Ley y las repercusiones de su accionar
sobre el desarrollo social antioqueño

Manuel Alejandro Naranjo Giraldo

Manuel Mesa Aristizábal

Universidad EAFIT

Escuela de Administración

Departamento de Economía

Medellín

2010

Los Grupos Armados al Margen de la Ley y las repercusiones de su accionar
sobre el desarrollo social antioqueño

Monografía para optar al título de Economista

Manuel Alejandro Naranjo Giraldo

Manuel Mesa Aristizábal

Asesores:

Christian Manuel Posso Suárez

Magíster en Economía Universidad del Valle

Andrés Julián Rendón Cardona

Magíster en Economía Universidad de los Andes

Universidad EAFIT

Escuela de Administración

Departamento de Economía

Medellín

2010

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	2
3. MARCO TEÓRICO.....	3
3.1 ESTADO DEL ARTE.....	3
3.2 HISTORIA DE LOS GAML EN COLOMBIA.....	12
4. DATOS.....	17
5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO.....	19
5.1 GAML en Antioquia en años recientes.....	19
5.2 Situación social de Antioquia en 2005.....	27
6. APROXIMACIÓN EMPÍRICA.....	30
7. ALCANCES Y LIMITACIONES.....	39
8. CONCLUSIONES.....	40
9. BIBLIOGRAFÍA.....	42

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Efectos agregados en homicidios y desplazamiento.....	32
Cuadro 2. Efectos agregados en educación.....	33
Cuadro 3. Efectos agregados en salud.....	34
Cuadro 4. Efectos individuales en educación.....	37
Cuadro 5. Efectos individuales en salud.....	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Actos Terroristas de los GAML en Antioquia 1998-2008.....	20
Figura 2. Actos Terroristas de los GAML en Colombia 1998-2008.....	20
Figura 3. Departamento de Antioquia por subregiones.....	21
Figura 4. Actos terroristas de GAML 1998-1999.....	22
Figura 5. Actos terroristas de GAML 2000-2001.....	23
Figura 6. Actos terroristas de GAML 2002-2003.....	24
Figura 7. Actos terroristas de GAML 2004-2005.....	25
Figura 8. Correlación espacial entre los municipios antioqueños en 2005.....	26
Figura 9. Tasa de homicidios y desplazamiento forzado (por expulsión) 2005.....	27
Figura 10. Tasa bruta de escolaridad en secundaria y tasa de deserción escolar en 2005.....	28
Figura 11. Cobertura de los regímenes subsidiado y contributivo de salud en 2005.....	29

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende abordar el tema de las consecuencias sociales del conflicto armado. En particular, se procura mostrar un acercamiento a las repercusiones del accionar bélico de Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML) sobre ciertos indicadores sociales, tomando como referencia a Sánchez y Díaz (2005), pero para el departamento de Antioquia¹.

En este sentido, este trabajo representa un esfuerzo por abordar una problemática que por su índole social se considera de interés generalizado para la sociedad colombiana, y en particular para la antioqueña. Al fin y al cabo, se considera que la Economía es ante todo una ciencia social y las herramientas (estadísticas, matemáticas o de otro tipo) usadas para derivar conclusiones de análisis teóricos, deben estar supeditadas al carácter social de la investigación y no en el sentido contrario.

Para lograr el objetivo propuesto, en primer lugar se realiza una revisión del estado del arte sobre las consecuencias del conflicto armado, en particular las sociales que, como se planteó, son el tema de interés de este trabajo. Esta recopilación de literatura se complementa con una descripción de la historia de los grupos armados en Colombia y su evolución en el caso particular de Antioquia, para lo cual se realiza un análisis descriptivo usando mapas del departamento.

Con el fin de encontrar evidencia empírica sobre lo anterior, se realiza un ejercicio que consiste en abordar el problema desde una perspectiva práctica, en el sentido de analizar los efectos del accionar de los GAML sobre algunos indicadores sociales en el Departamento, tanto a nivel agregado como individual. Es decir, se analiza la problemática de las secuelas de la presencia activa de grupos armados sobre indicadores a nivel municipal y sobre indicadores a nivel de los individuos antioqueños.

Los indicadores estudiados se seleccionaron considerando que las consecuencias sociales más graves del conflicto son el homicidio y el desplazamiento forzoso, además de la reducción en la capacidad de los individuos para acceder a los servicios de salud y educación.

El trabajo está dividido en siete secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda sección refiere una contextualización de la problemática que se va a trabajar, para luego presentar el marco teórico, que comprende una

¹ Por razones que se expondrán más adelante, se excluye del análisis a los municipios del Valle de Aburrá.

revisión del estado del arte y una recopilación histórica de la evolución de los GAML en Antioquia y particularmente en Antioquia. En la cuarta sección se describen los datos con los cuales se trabajó. Seguidamente, la quinta sección presenta un análisis descriptivo sobre el conflicto y la situación social en Antioquia. En la sexta sección se muestra el ejercicio empírico de los efectos agregados y los individuales y en la última sección se concluye.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

El conflicto armado en Colombia, al extenderse por más de 50 años, se instituye como uno de los tres más antiguos del mundo (Pizarro y Valencia, 2009), (Echeverry et al., 2001). El carácter duradero y cambiante de dicho conflicto lleva a que los diferentes análisis sobre las causas, desarrollo y consecuencias de éste se conviertan en aportes fundamentales para su comprensión y, consecuentemente, en marcos referenciales que propenden por la formulación de estrategias acertadas para su terminación².

En este contexto, Cubides et al. (1998) y Cohen y Rubio (2007) señalan que es universalmente admitido que la violencia, en sus múltiples y cambiantes manifestaciones, es el principal problema de la sociedad colombiana. La realización de este trabajo se justifica en brindarle un contexto y un apoyo empírico a esta afirmación y, para el caso específico de Antioquia, determinar algunos efectos del accionar criminal de los GAML sobre la sociedad del Departamento. Aunque a nivel nacional es casi que generalizado el sentimiento de repudio a los diferentes grupos que propician la guerra en nuestro país, la situación en el contexto internacional no es tan generalizada. De hecho en muchos países del mundo se le brinda apoyo a los grupos subversivos colombianos, incentivando su lucha armada y propiciando la perpetuación del conflicto interno en nuestro país. La tarea consiste entonces en construir un marco referencial que dé cuenta de la evolución del conflicto en el Departamento y hacer explícitas las consecuencias que ha tenido el accionar de los grupos armados sobre la población antioqueña en términos sociales. El rechazo a los actos terroristas de quienes se hacen llamar beligerantes debe extenderse a nivel global.

La idea de esta investigación nace en la Secretaría de Gobierno Departamental, durante el periodo de práctica profesional de uno de los autores, tras el

² El Premio Medalla Juan Luis Londoño de la Cuesta, en su versión 2010, fue otorgado a Ana María Ibáñez, precisamente por sus aportes en este sentido. El jurado estableció que "...sus contribuciones han ampliado nuestra comprensión de las acciones y políticas que pueden mitigar los efectos económicos del conflicto en la población civil." Revista Dinero (2010).

conocimiento de la problemática del conflicto armado en Antioquia y las dificultades que enfrenta la población que se ve inmersa en éste. Por tanto, se busca trasladar de la percepción a la cuantificación la evidencia sobre las secuelas de las acciones de los grupos armados en los habitantes del Departamento.

Además de lo anterior y de que, como se verá más adelante, el departamento de Antioquia ha sido históricamente uno de los más afectados por la presencia de grupos armados en el país, las motivaciones para estudiar el conflicto armado en el Departamento se fundamentan en un elemento adicional y es la manera particular a través de la cual se constituyeron la cultura de la ilegalidad y el apoyo a los grupos insurgentes en esta región. Rubio (1997a) plantea que Antioquia ha sido reconocida tradicionalmente como una región de “pujanza” y desarrollo, debido principalmente a las capacidades sociales y culturales de su gente, y a la fortaleza de sus instituciones sociales. Sin embargo, esta base institucional supuso la separación entre el marco legal vigente y las “reglas del juego” que regían las relaciones entre los antioqueños, puesto que las segundas demostraron generar resultados más efectivos. Así, las condiciones que generaron la posibilidad del rápido desarrollo económico de la región, se convirtieron a su vez en la base del crimen organizado y la adhesión a los grupos armados ilegales. Además, la informalidad que había caracterizado a la sociedad dio lugar a la ilegalidad como mecanismo de lucro y éxito económico.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Estado del Arte³

En las últimas décadas, la importancia de los conflictos armados en el mundo se ha vuelto un área de gran interés para la ciencia económica y en consecuencia, se ha desarrollado una amplia literatura tanto nacional como internacional referente a

³ En general, se ha observado que temas como el crimen, la violencia y particularmente la guerra civil, se asocian con el desarrollo de los conflictos armados internos. Así estos conceptos no sean equivalentes (véase Buvinic et al. 2005 para una descripción detallada), se debe tener en cuenta que la evolución de dichos sucesos y su impacto sobre la sociedad son de vital importancia para conocer el efecto total de un conflicto armado, especialmente el que se ha planteado en este trabajo, debido a que el accionar de los GAML se materializa precisamente a través de actos violentos y criminales. En Echeverry et al. (2001) se pueden encontrar definiciones de lo que se entiende por Conflicto Armado Interno a nivel internacional. Se acepta que si bien la violencia o el crimen no son objetivos en sí mismos, son instrumentos para alcanzar determinados fines políticos o ideológicos como los que supuestamente tienen los grupos subversivos y tenían las autodefensas en el país.

este tema. El punto de partida en este camino fue el estudio de Becker (1968), donde se muestra la problemática del crimen y la violencia precisamente como un asunto de estudio del campo económico. Desde entonces, las aproximaciones tanto teóricas como empíricas se han enfocado en aspectos como las causas, el desarrollo y las consecuencias económicas del conflicto armado (en diferentes países y contextos políticos e históricos). Sin embargo, al evaluar el estado del arte en cuanto a las consecuencias sociales del conflicto, se encuentra que no se han presentado muchos estudios al respecto.

Uno de los campos más estudiados dentro de este tema es el de las causas del conflicto (o del crimen en general). Establecer las causas de los conflictos armados no es tarea fácil pues cada conflicto ha sido fruto de diferentes acontecimientos y controversias propias del lugar donde éste se ha presentado. En general, trabajos como los de USAID (2005) y Justino (2008), han considerado que entre las principales causas de los conflictos armados internos se encuentra la exclusión de los hogares en las zonas más deprimidas de un país. Esto a su vez, es explicado por la pobreza de dichos hogares y la vulnerabilidad de éstos a raíz de la poca presencia de los servicios de seguridad del Estado, lo cual genera un círculo vicioso en el sentido que los hogares más vulnerables se vuelven más propensos a participar en el conflicto. Asimismo, Collier et al. (2003) establecen que hay ciertas condiciones que históricamente se han cumplido en la instauración de conflictos internos, como las tensiones étnicas o la lucha por recursos naturales, pero que la causa que finalmente determina que se dé un conflicto interno en un país es la situación socioeconómica de sus habitantes, particularmente, la pobreza y la desigualdad.

En otro sentido, y teniendo en cuenta las especificidades del caso colombiano, Sánchez y Núñez (2001) estimaron las causas de la violencia en el país entre 1980 y el 2000, y encontraron que las variables socioeconómicas (pobreza, desigualdad, exclusión y acceso a servicios básicos)⁴, aunque contribuyen a la explicación de la tasa de homicidios, lo hacen en menor medida que el narcotráfico, la presencia de actores armados y la eficiencia del sistema judicial (esta última con un impacto mucho menor que las dos anteriores). Montenegro y Posada (2001) por su parte, van más allá y establecen que cuando se trata de explicar la intensidad de la violencia en Colombia, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la “ausencia del Estado”, resultan significativas. De esta manera, en los estudios sobre el tema hay autores que han encontrado que existen causas objetivas de la violencia, mientras que la evidencia en otros casos indica que hay factores

⁴ Estas, entre otras, son conocidas en la literatura como las “causas objetivas” de la violencia. Se refiere a variables socioeconómicas como las mencionadas, que determinarían la incursión de los individuos en actividades criminales.

adicionales (como los mencionados) que explican de una manera más robusta la evolución de la violencia. Dos resultados interesantes en este sentido son, el de Bonilla (2009), y el de Rocha y Martínez (2003). El primero establece que las causas objetivas no explican el conflicto interno colombiano; y el segundo concluye que la pobreza tiene efectos negativos sobre la violencia (entendida como los repuntes regionales en la tasa de homicidio), mas no sobre el conflicto interno.

Se observa pues que en el contexto colombiano de las últimas décadas, las llamadas causas objetivas han perdido relevancia frente a variables como la presencia activa de grupos armados o el incremento del narcotráfico en la explicación del conflicto interno, contrario a lo que se ha observado en los casos internacionales.

Aunque el tema de las causas ha sido relevante en este ámbito de estudio, la literatura internacional le ha dado un merecido espacio al tema de las consecuencias de los conflictos armados, en especial en lo que refiere a los efectos económicos. Collier (1999), por ejemplo, muestra que la guerra devasta la economía en aspectos tan diversos como la destrucción de recursos físicos, el quebrantamiento del orden económico-social, la desviación del gasto público desde actividades productivas hacia la milicia, la destrucción del stock de capital por la disminución del ahorro, y la sustitución de portafolio por activos fuera del país, entre otros efectos. Además, se produce la erosión de instituciones y organizaciones, lo cual, unido a efectos como la muerte de individuos que hacen parte de la fuerza laboral, la destrucción de puentes y carreteras, y considerables aumentos de los costos de transacción, deteriora el ambiente económico.

El impacto económico negativo del conflicto se observa también en Hess (2003), donde se estima el efecto de la guerra sobre el crecimiento del consumo y su volatilidad, llegando al resultado de que los individuos cuyos países de origen experimentaron algún conflicto entre 1960 y 1992, estarían dispuestos a pagar aproximadamente hasta un 8% de su nivel de consumo actual para vivir en un territorio de paz. Adicionalmente, según Hoeffler y Reynal-Querol (2003), los países en estado de guerra interna pierden aproximadamente 2% del crecimiento económico promedio anual. Por otro lado, en el trabajo de USAID (2005) se observa que en época de guerra cae la inversión, el producto industrial, el producto agrícola y el PIB per cápita, lo cual es confirmado para América Latina en Giménez (2007).

En Colombia, uno de los estudios más completos que se han presentado al respecto es el de Álvarez y Rettberg (2008), donde se hace una recopilación de los trabajos que se han realizado sobre los costos en los que han incurrido la

sociedad y la economía del país tras el conflicto armado. Entre estos trabajos, el de Trujillo y Badel (1998), establece que los costos directos del crimen violento son las pérdidas de capital físico, capital humano y recursos naturales; mientras que los costos (económicos) indirectos son la pérdida de productividad, la disminución de la inversión, la ineficiencia en la asignación de recursos, y el aumento de los costos de transacción por el incremento de la incertidumbre, entre otros. Los autores estiman los costos del conflicto armado sobre la infraestructura energética, la pérdida de vías y el incremento del gasto en salud, y encuentran que entre 1991 y 1996 dichos costos ascienden a 2.9% del PIB promedio anual, cifra muy superior a la de países que han sido históricamente violentos como lo es Nepal, donde el costo del conflicto se ha estimado en 1.7% del PIB anual (Ra y Singh, 2005). Complementando lo anterior, Parra (1998) encuentra que la violencia ha sido un factor determinante en la des-acumulación de capital en el Colombia.

Se debe tener en cuenta que el efecto económico del conflicto golpea a todos los habitantes del país mediante la pérdida de infraestructura física, la pérdida de propiedad privada (si se es víctima de ello) y los efectos negativos sobre la FBKF, la productividad, y de manera más indirecta sobre los costos de transacción. Sin embargo, existen versiones opuestas sobre qué sectores de la población se ven más afectados por el conflicto. Rubio (1997) establece que el impacto económico más importante de la criminalidad y la violencia en Colombia es de índole redistributiva, en tanto que los grupos armados ilegales se apropian de recursos a los cuales no tienen derecho, mayoritariamente en el campo; además, se produce una concentración de enormes ingresos ilegales en manos de pocos criminales. Asimismo, en USAID (2005) se plantea que los hogares de bajos ingresos son más propensos a ser afectados por la violencia pues no tienen los medios para suplir privadamente las deficiencias en los servicios públicos de seguridad y justicia. Pottebaum y Kanbur (2004), por su parte, plantean que los hogares ricos son los que más pierden, dada su dependencia de los bienes públicos, los cuales se ven afectados en época de conflicto. Este resultado será ampliado más adelante cuando se aborden los efectos sociales del conflicto.

A pesar de esa dicotomía, se acepta que bajo cualquier enfoque y para cualquier grupo poblacional, los costos asociados a la violencia son considerables. En Bogotá, por ejemplo, Gaviria, et al. (2008) estimaron el valor que las personas estarían dispuestas a pagar para evitar el aumento en la tasa promedio de homicidios (como indicador de violencia en la ciudad) y se encontró que los hogares más ricos pagan hasta el 7.2% del valor de su propiedad, mientras que la clase media paga entre el 2.8% y el 4.4%; los hogares más pobres por su parte, se ven excluidos de los mercados privados que surgen por un bien público, como

lo es la seguridad, a causa de la precaria situación de la prestación de dicho servicio, de nuevo aumentando su situación de vulnerabilidad incluso en zonas urbanas.

Según lo anterior, se observa claramente que los costos económicos de los conflictos son elevados y éste es un asunto que requiere de acciones políticas para eliminar, o al menos menguar, algunos de los nocivos efectos que se han planteado. Aun así, los costos que el conflicto armado impone sobre la sociedad no quedan completamente cubiertos por la exposición anterior. Las consecuencias sociales del conflicto no han sido abordadas suficientemente en la literatura económica, básicamente por las dificultades que existen, tanto para medir los efectos sociales de un determinado suceso, como para establecer la relación (causalidad) entre dicho suceso y el detrimento de los indicadores sociales que se observa durante y luego del mismo. Esto es particularmente cierto para Colombia, donde, discutiendo la investigación de los efectos sociales de los conflictos armados, Restrepo (2001) establece que:

“En Colombia... el liderazgo en este esfuerzo de investigación ha correspondido a la historia, la sociología y la ciencia política... desde hace cerca de cinco años algunos economistas comenzaron a ocuparse de los temas relacionados con el conflicto colombiano y a intervenir en un debate que hasta entonces era marginal para ellos.” (pág.1).

Además, según Bejarano et. al (1997) no ha habido esfuerzos por cuantificar dichos costos, porque el efecto del conflicto se ha considerado “de sentido común”. Lo anterior va unido a que en Colombia hay un inconveniente adicional y es precisamente la dificultad que existe para medir el conflicto una vez éste ha llegado a niveles considerables como sucedió a finales de la década de los noventa (Rubio, 1998). Éstos no deben ser elementos disuasivos, sino por el contrario convertirse en retos para motivar investigaciones que den luces sobre esta problemática.

Se considera pues, que el deterioro social es de vital importancia para acercarse a una medición real (o por lo menos más completa) de las consecuencias que un conflicto armado tiene sobre los habitantes del lugar donde éste se desarrolla, principalmente porque pérdidas en términos de cobertura de servicios de salud y educación, casos de desplazamiento forzoso (y todo lo que ello implica), y pérdidas de capital humano para la economía, pueden ser por lo menos igualmente nocivas para sus habitantes como las pérdidas económicas que se han mencionado. Algunas aproximaciones para establecer relaciones de este tipo se

encuentran en Colletta y Cullen (2000), donde se plantea una clara relación entre el conflicto armado y el detrimento del capital social⁵.

Adicionalmente, y más relacionado con el objetivo de este trabajo, Pottebaum y Kanbur (2004) analizan los efectos de los conflictos internos sobre algunos indicadores sociales. En este trabajo se estima el efecto de las guerras civiles entre 1960 y 1999 sobre la mortalidad infantil, la expectativa de vida, al alfabetismo, las matrículas en educación secundaria, el PIB real per cápita y su tasa de crecimiento para diferentes países (precisamente aquéllos que registraron guerras civiles en el periodo de estudio). Allí se concluye que la guerra civil tiene efectos nocivos sobre los indicadores sociales, y además, que afecta en mayor medida a los países ricos que a los pobres.

Esta última afirmación se fundamenta en el hecho que la guerra destruye los bienes públicos y, como el sistema productivo de los países ricos y en general, el funcionamiento de su sociedad se encuentra más adaptado a ellos, su pérdida relativa es mayor. Los autores plantean que los bienes públicos pueden afectar directamente el logro de indicadores sociales, por ejemplo a través de la pérdida de infraestructura física y social como caminos, ferrocarriles, oferta de agua, sistemas de transporte y de energía, entre otros. Así, en Camboya, uno de los lugares que más se ha visto afectado por los conflictos internos, la pérdida de infraestructura ocasionada por la guerra incluyó escuelas, hospitales, caminos, puentes y telecomunicaciones. Según lo anterior, se establece que la guerra civil retarda el desarrollo económico y tiene considerables impactos negativos en el desarrollo humano. En este sentido, en USAID (2005) se establece que el bajo crecimiento económico y la pobreza debida a la competencia por los recursos escasos, son las principales consecuencias socioeconómicas del conflicto.

Por otro lado, hay factores del desarrollo social que pueden verse afectados y que no son evidentes mediante un análisis de los costos económicos de un conflicto armado. En Blattman y Miguel (2009), por ejemplo, los autores encuentran que, en cuanto al efecto de los conflictos internos sobre la formación de capital humano (educación, nutrición y salud, entre otros), el impacto observado es más persistente que aquel que actúa sobre los factores económicos (acumulación de capital, por ejemplo), debido a que los primeros se pueden seguir presentando muchos años después de la época de conflicto. Es tal el efecto, que las muertes causadas por secuelas persistentes de un conflicto interno sobre la salud de los habitantes pueden ser de igual magnitud a las muertes que se dan durante el conflicto (Ghobarah et al., 2003).

⁵ Capital social se entiende como las relaciones interpersonales y redes sociales sobre las cuales se construye la sociedad, así como la facilidad que existe para conformar éstas de manera eficiente.

Lo anterior se corrobora en Alderman, Hoddinott y Kinsey (2004), donde se establece una significativa diferencia entre la altura de aquellos adultos que sufrieron malnutrición en su niñez como consecuencia del conflicto en zonas rurales de Zimbabue, y aquellos que no, generando enormes desventajas para los primeros a la hora de incluirse en el mercado laboral no calificado. Igualmente, existen otras consecuencias cuyo efecto puede ser más difícil de medir como la pérdida de amigos cercanos o de familiares (Hess, 2003).

Para Colombia, Sánchez y Díaz (2005) realizaron el primer (y único conocido hasta el momento) acercamiento formal y riguroso a los efectos del conflicto armado sobre el desarrollo social en el país, entendido este último como la evolución de ciertos indicadores sociales que pretenden hacer un acercamiento a la calidad de vida de los individuos. Los autores encontraron un efecto nocivo de la presencia activa de GAML en los municipios colombianos para indicadores de capital humano, educación y salud, tales como la tasa de homicidios, los secuestros, el desplazamiento forzado, la asistencia escolar en los diferentes niveles, la cobertura del régimen subsidiado de salud y las tasas de mortalidad infantil.

Si bien no ha habido otro análisis completo como el anterior (del desarrollo social en su conjunto), se han realizado ciertas aproximaciones al problema que deben destacarse. Rubio (1997), por ejemplo, estudia algunos indicadores de índole social y determina que la violencia interna es la principal causa de mortalidad en el país y el mayor problema de salud pública. Asimismo, afirma que ésta ha alterado la fecundidad por muertes femeninas prematuras y por viudez, y ha incrementado el número de huérfanos. Además, plantea que la violencia tiene efectos negativos sobre la migración interna y externa y se identifica el hecho de que las decisiones de la juventud no han sido inmunes al ejemplo de las carreras más exitosas durante las últimas décadas, el crimen y el narcotráfico, lo cual constituye pérdidas inmedibles de capital humano para la economía. A pesar de los aportes teóricos expuestos en este trabajo, no se presentan estimaciones que den una luz sobre la evidencia empírica de las afirmaciones efectuadas.

En aras de contribuir a esto, Camacho (2008) utiliza un modelo lineal con datos de panel y encuentra que las explosiones de minas antipersonales tienen efectos negativos en el peso de los niños al nacer, hecho que se produce a través del incremento en el estrés; el impacto directo de este resultado es que la violencia (ataques terroristas) incrementa la desigualdad y tiene efectos intergeneracionales en la acumulación de capital humano, lo cual se evidencia también en Parra (1998). Por su parte, Urdinola (2004) utiliza un modelo de efectos fijos controlando por las características municipales no observables, para estimar el impacto de la

violencia política en la mortalidad infantil, encontrando que la primera tiene repercusiones negativas sobre la segunda.

A su vez, Fuentes (2005) estudia el efecto nocivo de la violencia sobre las variables educativas, realizando un análisis comparativo para Colombia, El Salvador y Guatemala. El autor encuentra que, en mayor o en menor medida, para los tres países estudiados la violencia (presencia de grupos guerrilleros y/o paramilitares en el caso colombiano) afectan tanto la cobertura escolar como la tasa de deserción. Esto es confirmado por Rubio (1997a), donde la relación entre la violencia y la educación es establecida como “capital social perverso”, cuyo objetivo termina siendo el deterioro de las instituciones estatales y la deserción escolar a favor de las ganancias monetarias que supone la participación en actividades ilegales, particularmente en las zonas donde se hace evidente la ausencia del Estado. Es decir, las organizaciones criminales y GAML se benefician de las redes sociales existentes y de la baja motivación que tienen los jóvenes para mantenerse en la legalidad, lo cual es confirmado por el análisis empírico de Gaviria (2000).

Es meritorio destacar que uno de los principales agravantes para el desarrollo social en Colombia ha sido el hecho que el mayor efecto de los GAML se ha presentado en las zonas rurales del país, donde la presencia del Estado es relativamente pobre en términos de seguridad, educación pública y servicios de salud⁶. Además, se acepta que existe una estrecha relación (en las últimas décadas, al menos) entre la violencia en Colombia y la producción de drogas ilícitas y el consecuente narcotráfico, lo cual, como se verá más adelante, en los años ochenta y principios de los noventa se volvió uno de las principales fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley junto con el secuestro extorsivo. En cuanto a esta relación, Díaz y Sánchez (2004) encuentran que ésta se ha dado de manera que la intensificación y expansión territorial del conflicto armado ha llevado a la proliferación de cultivos ilícitos y no en el sentido contrario.

En esa misma línea, Holmes et al. (2006) realizan un análisis con datos a nivel departamental de la producción de drogas ilícitas y su relación con actos violentos (violaciones de los derechos humanos) cometidos por grupos al margen de la ley. Se utiliza un modelo de datos de panel con efectos fijos en el cual la relación

⁶ En cuanto a los efectos sociales del conflicto, se observa que los hogares pobres sufren en mayor medida que los ricos puesto que, si bien el hurto y el secuestro golpean más a los hogares de mayores ingresos, el desplazamiento y la falta de acceso a servicios de salud y educación recaen sobre las personas más pobres. Además, el homicidio tiende a darse más entre los más pobres (Gaviria y Vélez, 2001).

fundamental entre las variables es constante en los diferentes departamentos y se encuentra que, corroborando lo anterior, no se observa una causalidad entre los cultivos ilícitos y la violencia como tal, aunque sí una relación positiva entre la erradicación de cultivos ilícitos y la violencia. Es decir, aparentemente la violencia puede intensificarse como consecuencia de la persecución al cultivo y producción de las drogas ilícitas y no como un efecto propio de la existencia de las mismas. Lo anterior se confirma para el análisis de cada departamento y aunque se observa que el departamento de Antioquia se ha caracterizado por altas tasas de violencia, no se observa relación alguna entre dicha violencia y la existencia de cultivos ilícitos. Aun así, se plantea que el fenómeno del cultivo y tráfico de drogas ilegales como consecuencia de la búsqueda de financiamiento y de la expansión territorial de los GAML, sí ha sido el causante del enorme problema de desplazamiento forzoso que existe en el país (Ibáñez y Querubín, 2004).

Ibáñez y Vélez (2005), estudian precisamente el impacto del conflicto en el desplazamiento forzoso y encuentran que este fenómeno va mucho más allá de los costos económicos inmediatos que implica, de manera que la pérdida de bienestar asciende al 37% del valor presente neto del consumo agregado de toda la vida (el método utilizado deriva los cambios de bienestar de modelos de utilidad aleatoria). Como es de esperarse, se encuentra que la violencia es un factor determinante en la decisión de migrar y modifica los determinantes tradicionales de la migración. Además, queda claro que el impacto de la violencia difiere entre zonas rurales y urbanas. Según los autores, en las zonas rurales los efectos son las confrontaciones armadas, las masacres y el desplazamiento forzado; y en las zonas urbanas las altas tasas de homicidio. Este trabajo menciona además el hecho de que Antioquia y Córdoba han sido dos de los departamentos con niveles más altos de desplazamiento a nivel nacional.

Otra de las principales fuentes para analizar el desplazamiento en Colombia a causa del conflicto armado es el estudio de Granada (2008). La autora establece que, durante el periodo de estudio, Colombia tuvo 3.5 millones de desplazados, dándole la lamentable posición de ser el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo luego de Sudán. En este trabajo se encuentra que los GAML han sido los principales causantes de los desplazamientos, aunque no de manera constante.

De acuerdo con esta revisión de literatura nacional e internacional, surgen dos conclusiones básicas. En primer lugar, los estudios presentados respaldan la hipótesis de que existen graves consecuencias sociales de los conflictos armados, pero los trabajos que analizan estos efectos sociales en su conjunto son escasos. En segundo lugar, algunos de estos efectos han sido cuantificados para el caso colombiano, pero no se ha considerado la situación particular del departamento de

Antioquia que, a todas luces y como se evidencia en el recuento histórico de los GAML que se presenta en la siguiente sección, parece ser uno de los departamentos más afectados por el conflicto. Así, emprender la tarea de buscar evidencia sobre el impacto en los indicadores sociales del accionar de los GAML en Antioquia será una labor novedosa y pertinente.

3.2. Historia de los Grupos Armados al Margen de la Ley⁷ en Colombia

Pretender dar una explicación completa y concisa al surgimiento y expansión de los Grupos al Margen de la Ley en Colombia no es una tarea sencilla. Diversos analistas han emprendido la tarea de hacer algún avance en este sentido, presentando aportes muy importantes en cuanto a la historia de estos grupos. Véase por ejemplo Echandía (1999), Rangel (1999), Cubides et al. (1998) y Gaitán y Deas (1995). En este apartado se pretende recopilar algunos de los hechos más destacados sobre la historia de los GAML en nuestro país, y presentar algunas ideas respecto a su surgimiento y consolidación en el departamento de Antioquia.

3.2.1. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC-

Aunque las FARC nacen oficialmente en 1966, sus orígenes se remontan a finales de la década de 1940. Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y el consecuente comienzo del periodo conocido como La Violencia, seguidores liberales y comunistas inculparon al gobierno conservador de estos hechos y se refugiaron en las montañas, llevando a la creación, en 1949, de autodefensas campesinas que lucharían por la defensa de la vida y la propiedad de la tierra. Luego de la toma de Marquetalia por parte del Ejército, estas autodefensas campesinas se transformaron en un movimiento guerrillero. Así, fue convocada la Primera Conferencia Guerrillera, en la cual nace el Bloque Sur en 1964; dos años más tarde, en 1966, y a partir de la transformación del Bloque Sur, la Segunda Conferencia Guerrillera da nacimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

A partir de los años ochenta el crecimiento de las FARC fue sorprendente. Éste estuvo ligado a la evolución del negocio de la coca, que les permitió cumplir con

⁷ Aunque en la historia de Colombia han existido otros grupos subversivos (Ejército de Liberación Popular-EPL-, Movimiento 19 de abril-M19-, entre otros) [Ver al respecto PNUD (2003)], en este trabajo se le brindará exclusividad a las FARC, y al ELN, dada la persistencia actual de sus acciones armadas y la predominancia que han ejercido en el territorio antioqueño. En cuanto a grupos de autodefensa, se describirá la historia de las AUC y tras su desmovilización, aspectos de las Bandas Criminales.

sus objetivos de financiación al cobrar impuestos por su cultivo, procesamiento y comercialización. Además, durante esa época fue muy importante el trabajo de masas en las zonas de colonización del país (Sánchez et al. 2003). En mayo de 1982, tras la Séptima Conferencia Guerrillera, las FARC se autodenominan Ejército del Pueblo (FARC-EP), decidiendo urbanizar el conflicto y buscando mayor financiación en las ciudades.

Durante la década de 1990, se produjo un crecimiento sostenido de las FARC y su consolidación territorial. Esta escalada se atribuye a varios factores: el desplazamiento de los grandes mandos a las regiones donde operaban los bloques armados, tras la incursión militar al corregimiento de Casa Verde, donde se ubicaba el puesto de mando del Secretariado; la destrucción del Cartel de Medellín y sus escuadrones armados, que dio pie para que las FARC aumentaran el control territorial y financiero del negocio del narcotráfico; y la crisis de legitimidad del gobierno de Ernesto Samper tras el escándalo de la financiación mafiosa de su campaña electoral, lo cual a su vez incentivó a las Fuerzas Armadas a fomentar la ampliación de grupos de autodefensas para fortalecer la lucha contrainsurgente (Reyes, 2009).

Las FARC han tenido presencia en todo el piedemonte de la Cordillera Oriental (Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Casanare y Arauca), en el Cauca, sur del Valle, norte del Huila y sur del Tolima, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca antioqueño, Córdoba y Urabá, y alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta (Guajira, Cesar y Magdalena). En 2001 se habían extendido además a Nariño, Chocó, Sucre, Cundinamarca, sur y occidente de Antioquia, el Catatumbo y la región cafetera de Caldas, Risaralda y Quindío.

Específicamente en el departamento de Antioquia, la política expansionista de las FARC comenzó en 1971, mediante la Cuarta Conferencia Guerrillera, en la que se dio pie al nacimiento de un nuevo frente en Urabá, como estrategia de consolidación guerrillera en todo el país. Con el apoyo popular en algunos casos, y la intimidación en otros, las FARC fueron aumentando su número de hombres, englobando su accionar en el territorio de Antioquia por medio del bloque Jose María Córdoba. Además de consolidarse en la subregión de Urabá, el grupo guerrillero hizo presencia en el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste y Occidente.

En los últimos años, tras la Política de Seguridad Democrática⁸ promulgada por el presidente Álvaro Uribe, se ha forzado a las FARC a concentrarse en zonas de refugio, que coinciden con áreas de cultivos ilícitos y rutas de exportación de drogas. De 110 frentes que tenían las FARC al comienzo del gobierno de Uribe,

⁸ Ver al respecto Ministerio de Defensa Nacional (2007).

en 2008 se habían reducido a 70 frentes. De hecho en febrero de 2008 muere alias “Tirofijo” y asume como comandante general del grupo guerrillero alias “Alfonso Cano”, recibiendo un grupo mucho más reducido del que dirigía su antecesor.

3.2.2. El Ejército de Liberación Nacional-ELN-

El ELN nace por la iniciativa de un grupo de jóvenes colombianos inspirados en la revolución cubana y en las ideas revolucionarias del Ché Guevara. En la ciudad de La Habana se crea la Brigada pro-Liberación Nacional José Antonio Galán en 1962. Dos años más tarde, en 1964, se crea el primer foco guerrillero en San Vicente de Chucurí, Santander. Ya en 1965 se materializa la creación del grupo guerrillero, tras la toma del municipio de Simacota, en la cual se anuncia la existencia del Ejército de Liberación Nacional.

La primera fase del movimiento guerrillero empieza con confrontaciones y la defensa del área de operaciones, constituida en los departamentos de Santander, Antioquia, sur del Cesar y Bolívar. Naciendo en Santander, el ELN se irradió al Magdalena Medio, Norte de Santander, Arauca, Casanare, la costa atlántica y regiones aisladas del occidente y sur de las montañas andinas. Luego buscó alcanzar la frontera con Ecuador, estableciendo focos de acción en el suroccidente del país, en el sur del Chocó, Valle, Huila y Cauca.

A partir de 1983, la financiación que obtuvo de la explotación del petróleo de Caño Limón, en Arauca, y la construcción del oleoducto hasta Coveñas, junto con el dinero obtenido del secuestro, propiciaron el dominio del nororiente del país durante los años 80 por parte del ELN (Reyes, 2009). Cabe mencionar además que, al igual que las FARC, el ELN se benefició de la intención de aumentar la importancia y participación política de los niveles locales y regionales propuesta por el Gobierno de Belisario Betancur y luego por la Constitución de 1991. Al pretender aumentar la presencia del Estado en las zonas en las cuales éste había estado ausente históricamente y lograr una eficiente descentralización del poder público, lo que se produjo fue que las regiones, fortalecidas en términos de competencias y recursos financieros, se vieran más afectadas por la violencia impuesta por los diferentes grupos armados que doblaron sus esfuerzos por ejercer presión e influencias sobre el manejo político de las regiones y beneficiarse de los recursos estatales. (Kurtenbach, 2005).

Durante la década del 80, la expansión en el departamento de Antioquia fue muy acelerada. En el Bajo Cauca Antioqueño y en el Magdalena Medio delinquiría el Frente de Guerra Noroccidental a través de la cuadrilla José Antonio Galán. En

1986 comienza a operar en el Oriente antioqueño el frente Carlos Alirio Buitrago; en 1987 la cuadrilla Ché Guevara (del frente noroccidental) se extiende por el Suroeste del Departamento y Chocó, regiones en las cuales los guerrilleros se beneficiaban de la explotación de las minas de oro.

Desde la segunda mitad de la década del noventa, la avanzada de las AUC sobre su territorio y la competencia con las FARC por los recursos provenientes del narcotráfico y el petróleo, debilitaron militarmente al ELN. Además, la activación de grupos paramilitares en la costa atlántica en 1997 afectó la permanencia del ELN en la región, pues el trabajo político llevado a cabo por esta guerrilla con las comunidades se vio menguado con los asesinatos de sus colaboradores por parte de las autodefensas. A partir de ese momento, sus áreas de mayor acción fueron Arauca, Norte de Santander, Cesar, Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño (Vélez, 2002).

El debilitamiento de esta guerrilla continuó y en 2007 el ELN inició conversaciones formales de paz con el gobierno de Álvaro Uribe en diálogos realizados en La Habana, Cuba. En 2008 éstos languidecieron por la falta de avances en la negociación. El gobierno siguió con su ofensiva militar sobre el grupo guerrillero y el ELN recibió protección por parte de las FARC (excepto en Arauca), lo cual impidió su derrota definitiva (Reyes, 2009). Por efectos de esta protección militar, se cree que las posibilidades de negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla están supeditadas a lo que decidan las FARC; el ELN seguramente seguirá el mismo camino.

3.2.3. Grupos paramilitares y bandas emergentes⁹

Se habla en la literatura sobre el tema de dos factores que contribuyeron a la formación del paramilitarismo en Colombia: por un lado, algunos esmeralderos y contrabandistas comenzaron a exportar marihuana y luego cocaína, con lo que acumularon grandes excedentes que invirtieron en tierras, especialmente en Córdoba, Urabá, Antioquia, Magdalena Medio y Meta, con lo que se produjo un cambio de la composición de las élites propietarias de la tierra; por otro lado, la negociación de paz del presidente Belisario Betancur y la desautorización por

⁹ La desmovilización de los grupos de autodefensa durante el Gobierno de Álvaro Uribe llevó al surgimiento de Bandas Criminales, organizaciones a las cuales no se les reconocen fines políticos, pero que deben ser tenidas en cuenta dentro de la delincuencia organizada del país, dada su continuidad en la actividad criminal. Como no existe un nombre general en el que se puedan enmarcar estos dos grupos, en este recuento se hace referencia a ambos, teniendo en cuenta que en el análisis (y en las estadísticas) existen AUC hasta 2006 y a partir de 2007, las llamadas Bacrim.

parte de éste de la guerra antisubversiva, despertó en los militares un sentimiento de traición por parte de la clase política y los llevó a fomentar la creación de autodefensas campesinas que serían financiadas por los propietarios de tierras en aquéllas zonas amenazadas por la guerrilla.

En la década del 80, el movimiento paramilitar se expandió hacia Córdoba y Urabá, donde se crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); el nororiente antioqueño, donde se creó el Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste; el Magdalena Medio, con los movimientos de Puerto Boyacá y San Vicente de Chucurí; en Magdalena, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Meta, Caquetá y Putumayo. Las mafias del narcotráfico fueron aliadas de la lucha antisubversiva y propiciaron la creación de ejércitos privados en estos lugares (Reyes, 2009a).

En 1996 se conformó una federación de grupos de autodefensa constituida por siete organizaciones regionales, conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desplazó sus frentes armados a las zonas de influencia guerrillera. Ejerció dominio en muchos territorios donde previamente imperaba el poder guerrillero y expulsaron grandes cantidades de población campesina presuntamente colaboradora de la guerrilla.

Luego de un largo proceso de expansión territorial acompañado de masacres, intimidación, despojo de tierras, entre otras acciones, y posteriormente de un repartimiento de tierras y rutas del narcotráfico con los grupos guerrilleros, los grandes mandos de las AUC decidieron negociar con el gobierno de Álvaro Uribe. A partir de 2003 y con más ahínco tras la aprobación de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), los grandes grupos de autodefensa se desmovilizaron para reinsertarse a la vida civil. Según cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado-PAHD-, entre 2003 y 2007 se desmovilizaron en el país 35.353 miembros de las AUC (Pizarro y Valencia, 2009). Sin embargo, las necesidades de control territorial del narcotráfico, las rentas provenientes de la extorsión y las demandas de seguridad privada, entre otros factores, no propiciaron una desmovilización completa de estos grupos.

En la actualidad no hay un problema de autodefensas; existen bandas criminales (Bacrim) organizadas que reclutan desmovilizados y buscan consolidarse en el negocio del narcotráfico. Su accionar se manifiesta en asesinatos selectivos y en intimidación para el control territorial del microtráfico de estupefacientes, el cual les proporciona grandes rendimientos. Actualmente no existe la tolerancia relativa que existía con las AUC y por el contrario hay un completo compromiso institucional encaminado a capturar y judicializar a los miembros de Bacrim (Reyes 2009a).

Se resalta pues la contribución de la historia de los grupos armados al conocimiento de la evolución del conflicto armado en el país, y se evidencia la importancia que ha tenido el accionar de estos grupos sobre el desarrollo de la nación. Esta sección permite además, abordar la complejidad que supone esta problemática, puesto que el conflicto interno colombiano perdió el tinte ideológico que hacía referencia a la dicotomía Occidente-Oriente, capitalismo-socialismo y pasó a tener un trasfondo terrorista vinculado con el narcotráfico¹⁰. Aun así, las causas del conflicto contienen elementos más profundos y antiguos que cualquier interés particular actual y es esta disyuntiva lo que hace que el conflicto colombiano sea un caso tan particular y de tan difícil resolución. (Kurtenbach, 2005).

Si bien en la actualidad se ha avanzado en cuanto a la contención y arrinconamiento de estos grupos, la realidad es que gran parte del territorio nacional, y del antioqueño particularmente, sigue viéndose afectado por la presencia de uno o varios de los grupos mencionados. En el caso especial de Antioquia, en el recuento presentado se evidenció que históricamente el Departamento ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado. Esto, unido al hecho que los GAML no han podido ser neutralizados aún, se convierten en motivaciones suficientes para analizar el efecto que ha tenido el accionar armado sobre ciertos indicadores de índole social.

4. DATOS

El contraste de la hipótesis planteada en este estudio requirió de la consolidación de una base de datos con desagregación municipal para el departamento de Antioquia, en el año 2005, la cual está compuesta de diferentes variables de características sociales y geográficas, cultivos ilícitos, desplazamiento, delitos de impacto como el homicidio y el secuestro, y variables de conflicto armado como actos de terrorismo, hostigamientos, contactos armados, entre otras.

Dicha base se construyó a partir de diversas fuentes: las variables sociales y geográficas se obtuvieron del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia; las variables de cultivos ilícitos, del proyecto SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC-; las variables de homicidios y otros delitos de impacto, de la DIJIN-Policía Nacional; y la variable de

¹⁰ Como ya se señaló, el componente del narcotráfico es de vital importancia para comprender los efectos del conflicto, debido a que se considera que la violencia generada por los grupos guerrilleros y paramilitares se vuelve un factor determinante en el desequilibrio del sistema político a partir de mediados de la década de los ochenta, mediante el surgimiento de narcotraficantes como nuevos participantes activos en el conflicto.

desplazados, junto con las de conflicto armado, del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia.

Adicionalmente, se trabajó con una base de conflicto armado del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE- de la Universidad de los Andes, la cual permitió hacerle seguimiento a la evolución del conflicto armado en Antioquia en al menos 10 años, y conocer la discriminación de las acciones criminales según el grupo armado (FARC, ELN, AUC o desconocido). Además, a partir de los datos de esta base se construyeron variables binarias de persistencia del conflicto armado que posibilitaron plantear la exogeneidad de las variables independientes. Es decir, estas variables son las que permiten inferir que el efecto encontrado es exógeno en tanto que la presencia de GAML tiene efectos sobre los indicadores sociales, y no en el sentido contrario. Esta relación será explicada con más detalle en la sección del ejercicio empírico.

Finalmente, con el fin de plantear un ejercicio de robustez para el trabajo, se utilizó la base del Censo del 2005 para evaluar los efectos del conflicto a nivel de los individuos con el fin de contrastar estos con los resultados municipales y corroborar los hallazgos. Dicho Censo, el último que se ha hecho en el país hasta ahora, proporcionó una gran cantidad de microdatos que permitieron realizar un análisis adicional el cual fortalece los resultados encontrados a nivel municipal.

Dado su acceso restringido, estas dos últimas bases proporcionan una novedad adicional a este trabajo, al permitir explorar datos que no habían sido utilizados antes en investigaciones referidas al departamento de Antioquia¹¹. Además, estos datos permitieron complementar los diferentes análisis efectuados a lo largo del estudio, los cuales, dada la escasez de información que se encontró a nivel municipal para el Departamento¹², se habrían quedado cortos de no haber podido contar con esta información adicional.

¹¹ Adicionalmente, no existe en el país un trabajo conocido por los autores en el cual se evalúe el impacto de la presencia activa de GAML en un municipio sobre sus individuos usando los datos del Censo.

¹² Inicialmente se trató de construir un panel de datos que permitiera contar con un mayor número de observaciones y permitiera realizar un análisis de al menos una década, pero la información estadística encontrada no era consistente para todos los años. Parece que la cultura estadística en el Gobierno Departamental apenas está empezando a fortalecerse, pues la consolidación de información de años atrás no es muy completa, en especial para las variables de interés de este trabajo (las sociales fundamentalmente). Por lo anterior, este trabajo y la recopilación de datos que le acompaña cobran especial importancia.

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

5.1 GAML en Antioquia en años recientes

Los últimos años de la década del noventa y los de principio de la década del dos mil son de gran importancia para entender el efecto reciente de los GAML en el departamento de Antioquia por diversos motivos, entre los cuales se destacan el fortalecimiento de las FARC en épocas de la zona de despeje y los procesos de desmovilización de las AUC.

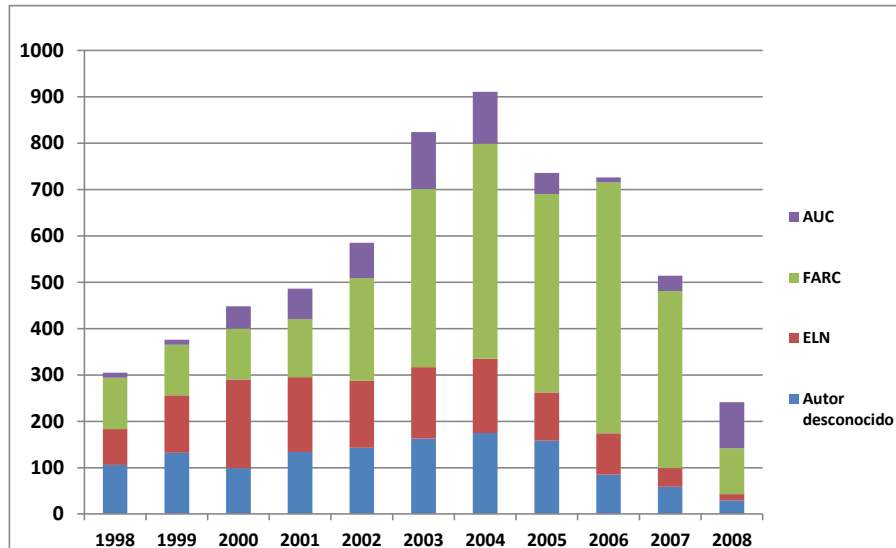
Siguiendo la tendencia nacional, durante estos años se observó en Antioquia un recrudecimiento del conflicto que se tradujo en aumentos constantes de los actos terroristas¹³ cometidos por los GAML, hasta alcanzar un máximo de 911 en 2004. Luego de este momento, las políticas implementadas por el Gobierno de Álvaro Uribe empiezan a dar resultados visibles en el número de estas acciones violentas, de manera que para 2008 el número de actos terroristas se había reducido a 151, valor considerablemente por debajo del observado en 1998 (300), que supuso un momento crítico en la situación de seguridad nacional y llevó al Gobierno de Andrés Pastrana a negociar la zona de despeje en el Caguán. El 2005, que es el año de interés de este trabajo, consta de una particularidad importante puesto que marca el punto de quiebre de la tendencia, es decir, el instante en el que las acciones terroristas en el país comienzan a decrecer. Es de esperarse que el momento en el cual se hayan sentido los mayores efectos del conflicto sea aquel en el que la senda de acciones terroristas empezó a declinar, es decir, luego de su período más crudo.

La tendencia mencionada puede observarse en las Figuras 1 y 2, donde se presenta el número total de actos terroristas según el grupo que los cometió, tanto para Antioquia como para el total de Colombia. Allí se hace evidente el mencionado fortalecimiento de las FARC, así como el debilitamiento paulatino del ELN, el cual, como ya se dijo, se debió a la acción del Estado y a los enfrentamientos entre este grupo y las AUC. En estos dos gráficos es posible observar además, que las FARC han sido el grupo armado que más efectos ha tenido sobre la sociedad colombiana (y la antioqueña particularmente), en tanto que ha sido la organización que más actos terroristas ha cometido sobre la población y la infraestructura del país. Por último, los gráficos confirman las afirmaciones efectuadas sobre la situación del departamento de Antioquia como una de las más graves en el contexto del conflicto armado colombiano. En este

¹³ Dentro de los actos terroristas se tienen en cuenta atentados, incursiones a poblaciones, emboscadas, hostigamientos, retenes ilegales, contactos armados, entre otros.

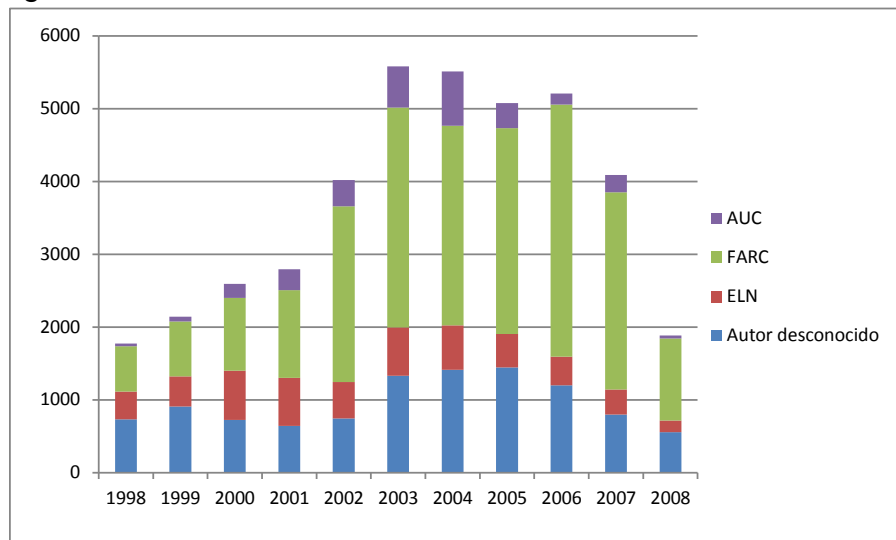
sentido, los datos evidencian que del total de actos terroristas que se presentaron en el país entre 1998 y 2008, al territorio de Antioquia le corresponde una proporción cercana al 15%, cifra considerable si se tiene en cuenta que el país está dividido en 32 departamentos.

Figura 1: Actos Terroristas de los GAML en Antioquia 1998-2008.¹⁴



Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

Figura 2: Actos Terroristas de los GAML en Colombia 1998-2008



Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

¹⁴ Como se mencionó anteriormente, luego del proceso de desmovilización que terminó en 2006, las organizaciones criminales restantes de las antiguas AUC pasaron a conocerse como BACRIM. La barra morada en 2007 y 2008 debe ser entendida como las acciones de este grupo.

Además de la tendencia departamental, el análisis de los actos terroristas puede realizarse al interior de Antioquia tanto a nivel subregional como a nivel municipal. Para el objetivo de este trabajo, no se ha considerado necesario entrar en detalle sobre las causas de la situación particular de cada municipio, aunque se presentan aquí mapas descriptivos para observar las tendencias subregionales y algunos casos especiales de municipios que, o han sido históricamente violentos, o no han percibido la presencia de grupos armados de manera persistente.

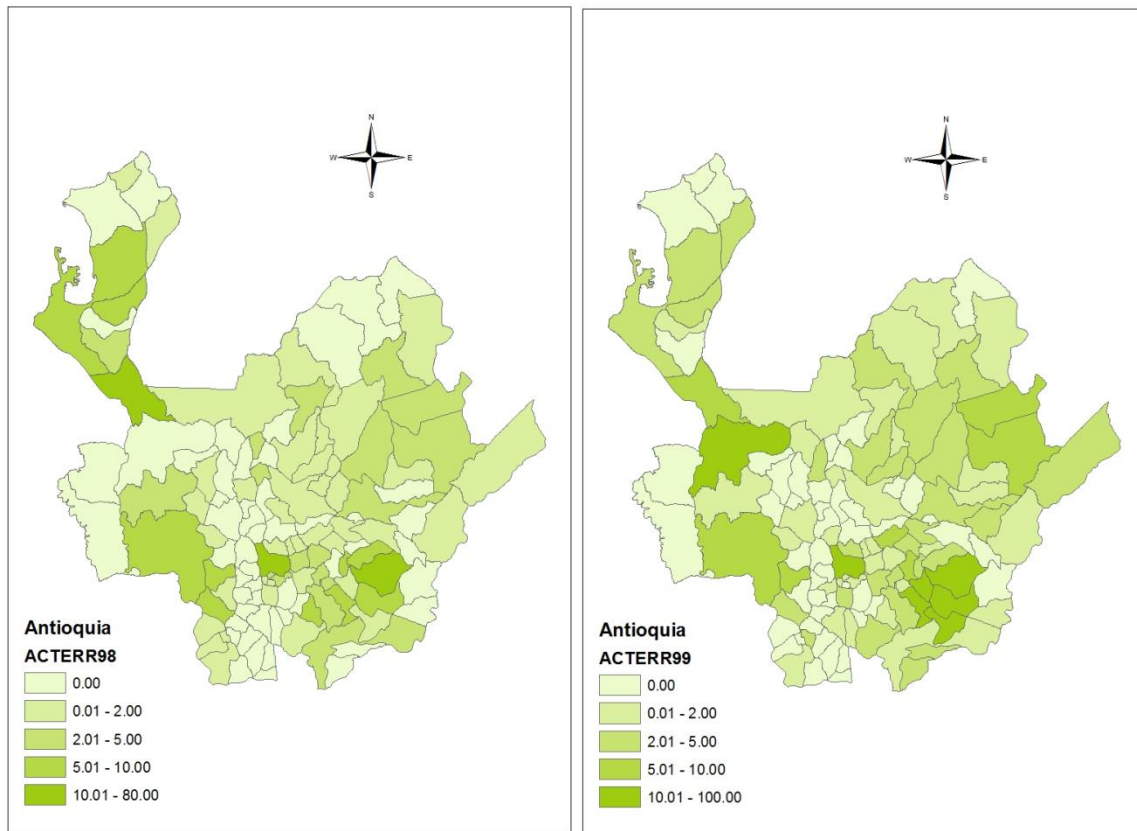
Figura 3: Departamento de Antioquia por subregiones



Fuente: Elaboración propia con datos de la Gobernación de Antioquia, 2010.

El Figura 3 identifica las subregiones que establecen la división administrativa por parte de las autoridades departamentales. Por sus características geográficas, étnicas y culturales, cada subregión tiene una dinámica (levemente) diferente a las demás. Históricamente se ha observado que el conflicto armado se ha dado con mayor magnitud en algunas subregiones que en otras, generando en las primeras un mayor deterioro económico y social. A pesar de esto, como ya se mencionó, el Departamento en su totalidad se ha caracterizado (particularmente en los años analizados) por ser uno de los más violentos del país.

Figura4: Actos terroristas de GAML 1998-1999.



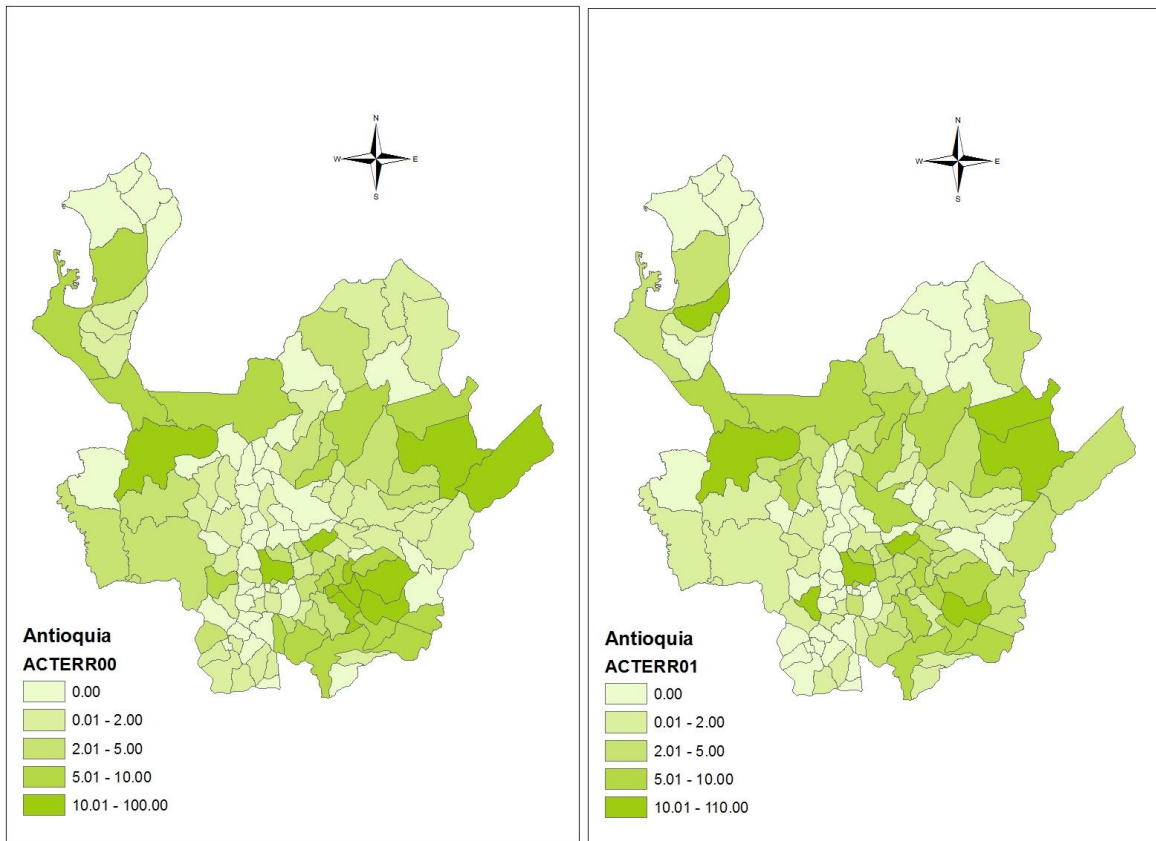
Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

En cuanto a las subregiones, el Figura 4 permite inferir que durante 1998 y 1999 casi la totalidad de las subregiones se mantuvieron con niveles bajos de actos de terrorismo. Urabá, Nordeste y Magdalena Medio parecerían presentar una media mayor que las demás regiones, pero todos los municipios presenciaron menos de 10 actos terroristas, con la excepción de unos pocos.

También se observa que hay una considerable proporción de municipios que no tuvieron presencia activa de los GAML en 1998-99, aunque resaltan unos pocos con más de 10 actos terroristas para cada año, entre los cuales se encuentra Medellín. Cabe mencionar que, como ya se ha establecido, la dinámica del conflicto armado en el Valle de Aburrá es diferente a las demás subregiones en tanto que se considera un conflicto más urbano en el cual las causas (y muchas de las consecuencias) del conflicto en las zonas rurales no existen; aun así, por su tamaño y concentración de población, Medellín es siempre el municipio con mayor número de actos de terrorismo¹⁵

¹⁵ De hecho, con pocas excepciones, la escala debe usarse más allá de los 30 actos de terrorismo únicamente debido a Medellín.

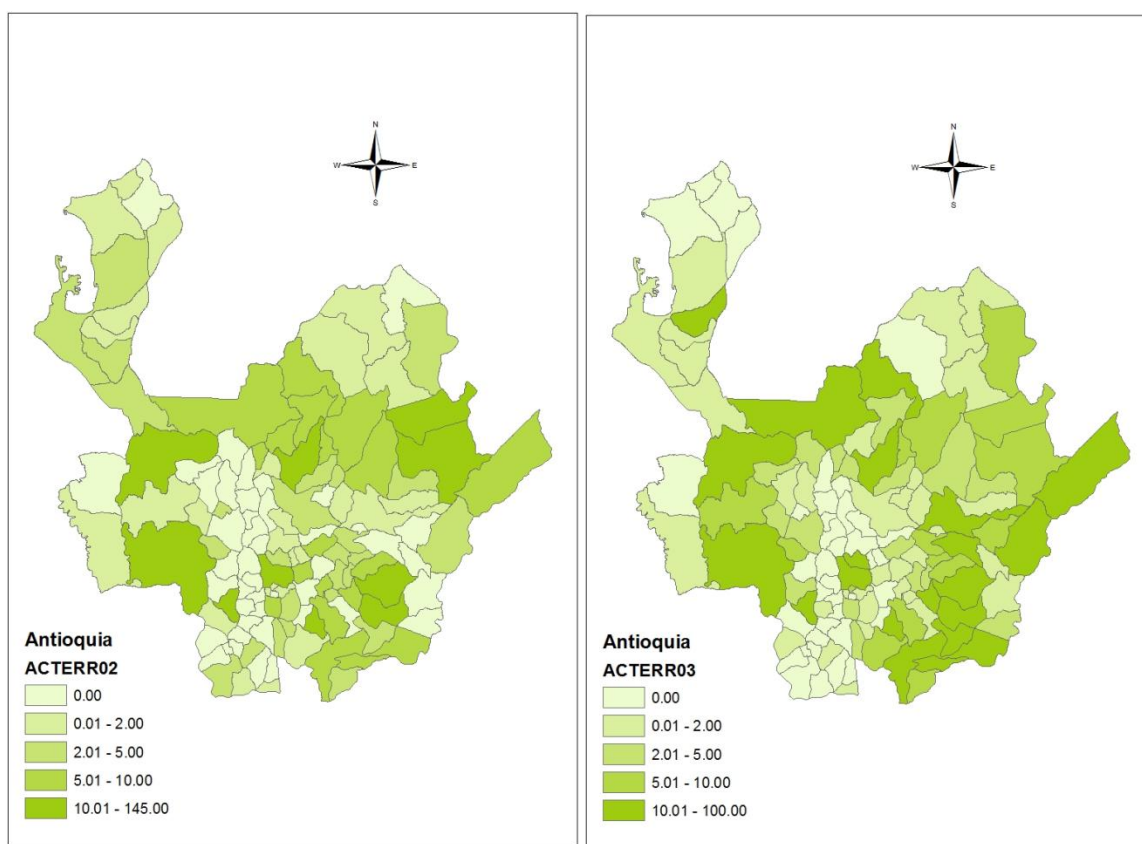
Figura5: Actos terroristas de GAML 2000-2001.



Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

En el Figura 5 de observa que durante 2000 y 2001 aumentaron los actos de terrorismo en promedio en las diferentes subregiones, sobre todo en Nordeste y en el Norte. Algunos municipios como Dadeiba en el Occidente o San Carlos en el Oriente resaltan por haber sufrido más de 10 acciones durante ambos años, e incluso municipios como San Luis y Cocorná presentan más de 25 acciones en 2001.

Figura6: Actos Terroristas de GAML en 2002-2003.



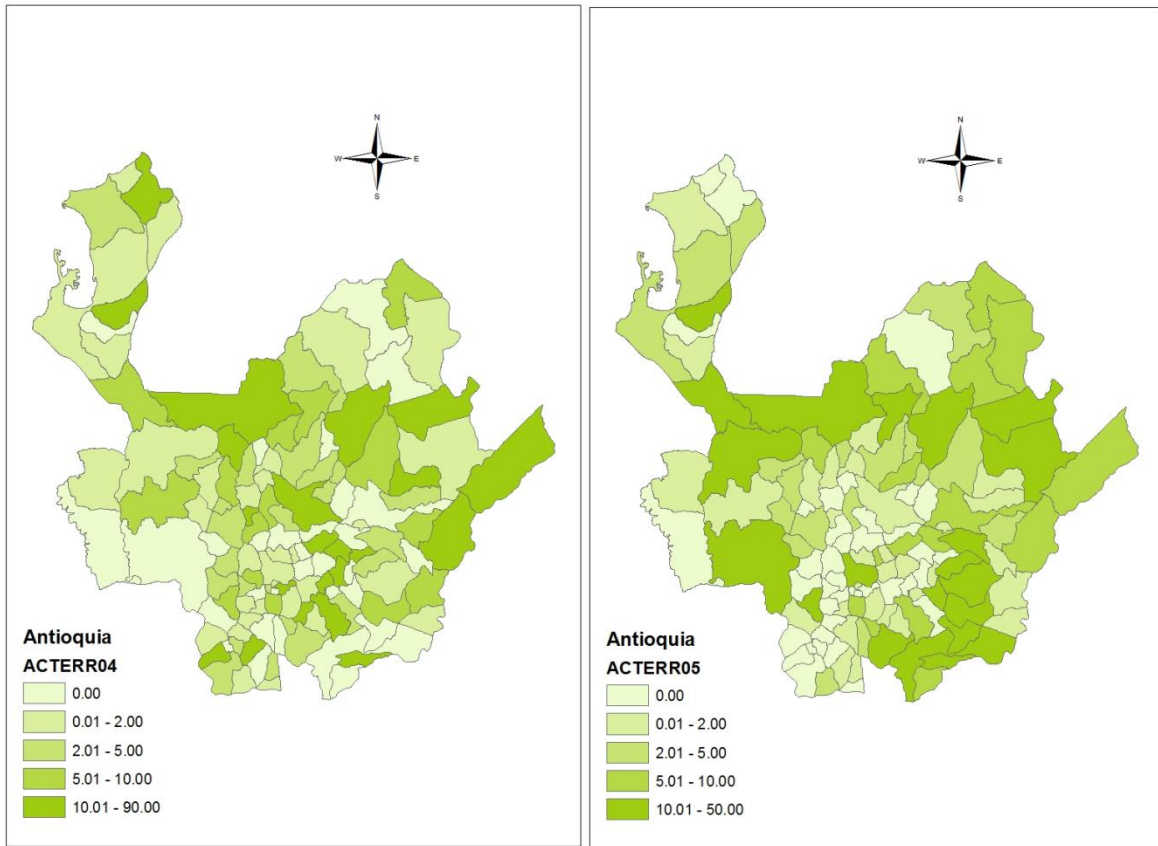
Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

El Figura 6 muestra los actos de terrorismo durante 2002 y 2003 y evidencia la continuación de la tendencia, es decir, la agravación del conflicto medido a través de los estos actos.

El mapa en el 2003 permite inferir la gravedad de la situación que se vivía en el momento, puesto que para cada subregión hay por lo menos un municipio que sufrió más de 10 acciones y varios que sufrieron entre 5 y 10. Con lo visto hasta el momento, se podría establecer que el Magdalena Medio y el Oriente son las subregiones que más actos de terrorismo han sufrido.

Otra característica del análisis visual es que permite identificar algunos municipios donde, si bien no se podría afirmar que no ha habido efecto alguno del conflicto, no se han presentado acciones terroristas en los años analizados. Este es el caso de municipios como Sabanalarga, Liborina y San Jerónimo. La heterogeneidad que mantiene la coloración de los mapas, incluyendo estos vacíos, resalta la importancia de analizar los efectos del conflicto a nivel de los municipios, como se hará más adelante en este trabajo.

Figura 7: Actos Terroristas de GAML en 2004-2005.



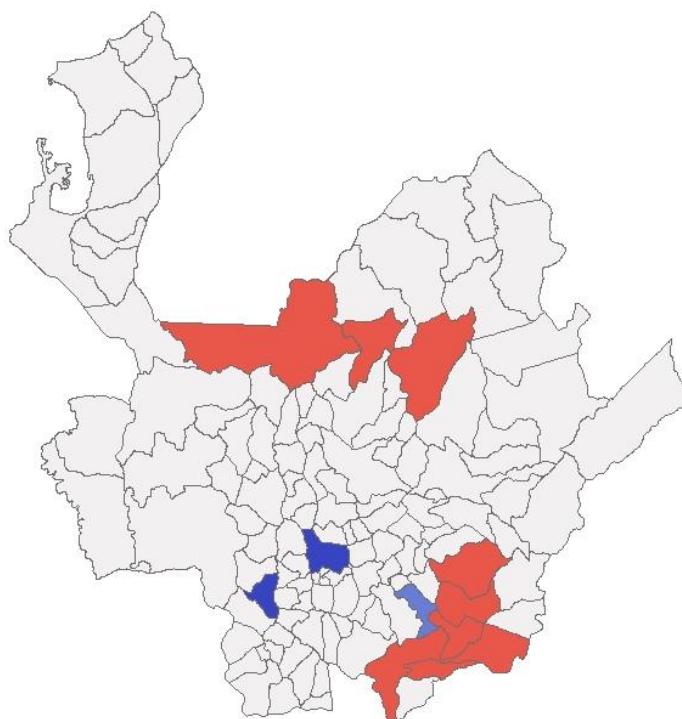
Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

Finalmente, si bien en 2004 y 2005 (Figura 7) se mantiene una alta proporción de municipios con un número elevado de actos terroristas, se puede observar que en comparación con el mapa anterior el número total de las acciones disminuye. Cabe resaltar que algunos municipios (como Urrao y Sonsón) que no presentaron acciones en 2004, sufrieron más de 10 en 2005, lo cual puede explicarse por la continua expansión de las FARC en el Departamento. A pesar de esto, como se mencionó antes, 2005 representa el inicio del decline del número de acciones terroristas en Antioquia.

Algunos de los municipios mencionados comienzan a perfilarse como altamente violentos y, de hecho, como puede observarse en los mapas, estos municipios generan *clusters* de conflicto, lo cual lleva a que los municipios aledaños a éstos, si bien no alcanzan el mismo grado de terrorismo, sufren las consecuencias de la cercanía.

Para corroborar esta hipótesis, se calculan las correlaciones espaciales¹⁶ entre los municipios según el nivel que toma el conflicto en el año de interés (2005). El Figura 8 permite inferir que existen dos *clusters* de municipios con altos niveles de ataques terroristas (representadas en rojo en el mapa) en las cercanías de Ituango y Anorí, por un lado y en las de Sonsón y San Luis, por el otro. Este resultado es importante puesto que indica que ciertos municipios representan casos críticos y la situación de seguridad no es homogénea a lo largo del departamento, lo cual hace relevante el análisis municipal.

Figura 8: Correlación espacial entre los municipios antioqueños en 2005¹⁷.



Fuente: Elaboración propia con datos del CEDE, 2010.

Un resultado interesante del análisis mediante los mapas es que la tendencia departamental (y nacional) que se mencionó en un principio también puede evidenciarse aquí. Año tras año se observa que los mapas se hacen más oscuros, reflejando el aumento de las actividades de los GAML en todo el Departamento.

¹⁶ Se calcula el estadístico de “Anselin Local Moran I” (Anselin, 1995) con contigüidad de polígonos, es decir, los municipios son afectados únicamente por sus vecinos.

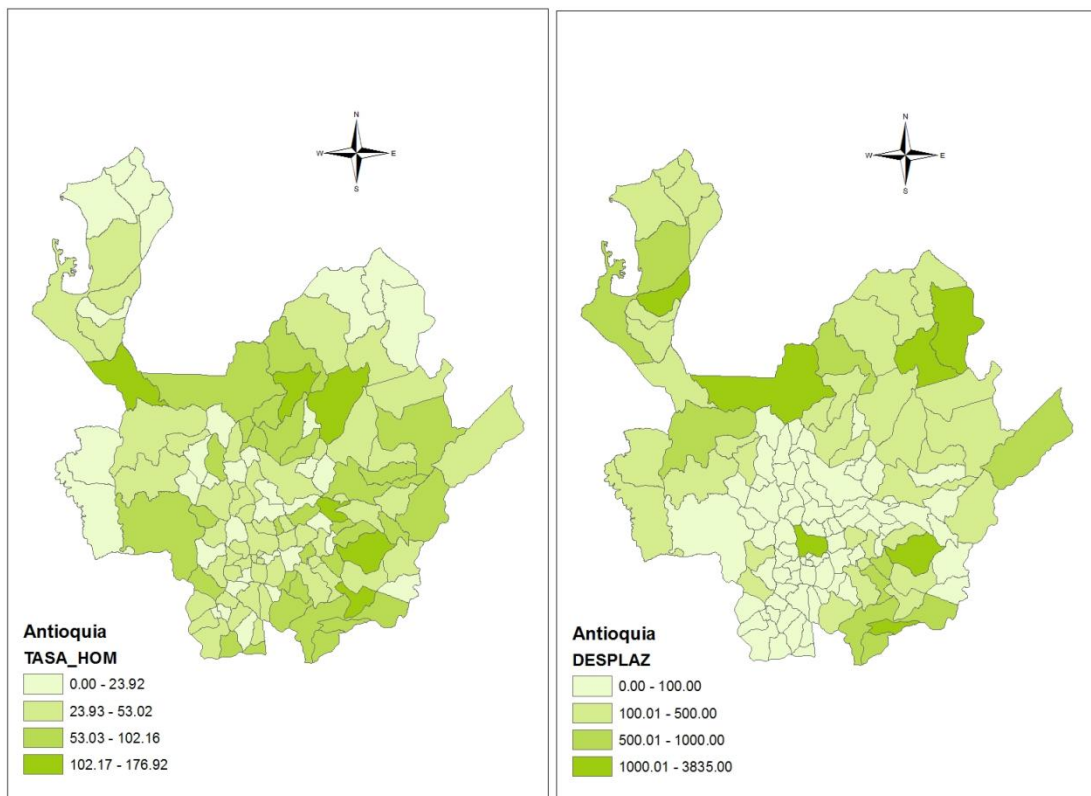
¹⁷ Se incluyen únicamente municipios con valores estadísticamente significativos al 5%.

5.2 Situación social de Antioquia en 2005

Para analizar los efectos sociales del conflicto, además de las acciones terroristas de los GAML, es necesario conocer la situación social de los antioqueños en el momento del estudio. Por este motivo, se presentan para el año 2005 las variables que se han considerado determinantes del desarrollo social, evidenciando las diferencias entre municipios (y en consecuencia entre subregiones) en esta caracterización.

Como ya se ha mencionado, este trabajo considera que las consecuencias sociales más importantes del conflicto armado son el homicidio y el desplazamiento forzoso de los habitantes del Departamento. La tasa de homicidios y el número de desplazados (por expulsión) por municipio puede observarse en el Figura 9. En éste se percibe una alta heterogeneidad en cuanto al número de desplazados y cierta similitud en las tasas de homicidio de los municipios.

Figura 9: Tasa de homicidios y número de desplazados (por expulsión) en 2005



Fuente: Elaboración propia con datos del DAP¹⁸ de Antioquia, 2010.

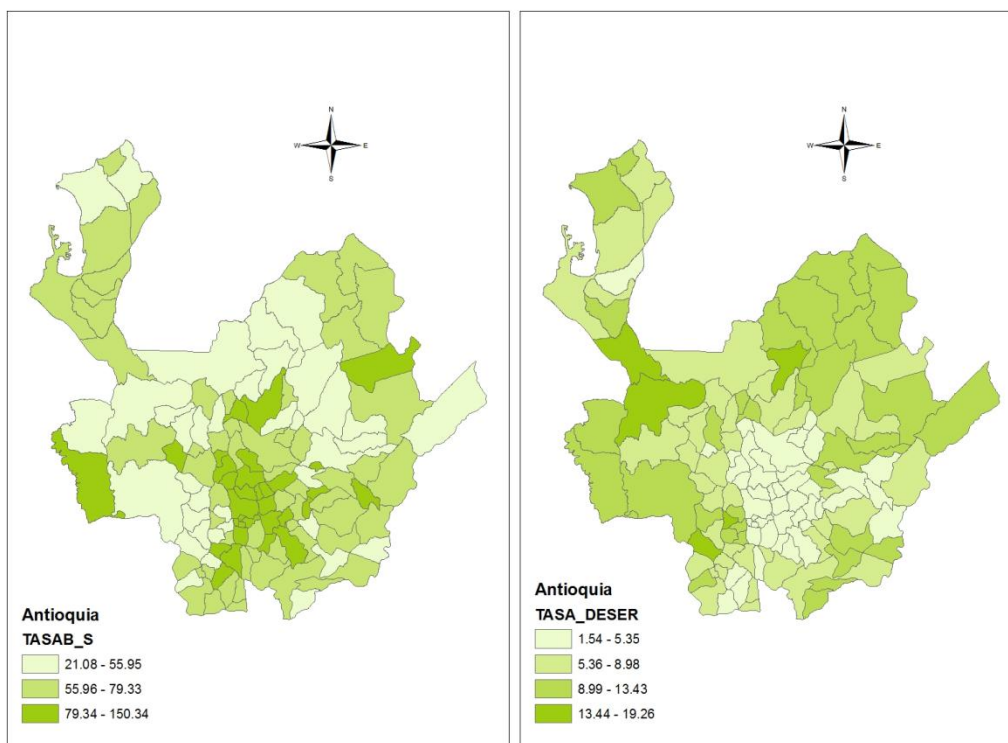
¹⁸ Departamento Administrativo de Planeación. Se trata del organismo de la Gobernación de Antioquia que centraliza el manejo de estadísticas en el Departamento.

Además, el Figura 9 permite concluir que los municipios más afectados en términos de homicidios, como Mutatá o Anorí, no concuerdan con aquellos que han desplazado más habitantes (Ituango o El Bagre, por ejemplo).

Unido a lo anterior, se ha considerado que el accionar de los GAML en los municipios antioqueños afecta en mayor medida a su población a través de la dificultad que genere para que ésta reciba los servicios de educación y de salud. Es decir, además de sufrir directamente atentados contra la vida o verse obligado a dejar su hogar, el no tener acceso a la educación y a la salud son consecuencias muy graves para los individuos de una sociedad (municipio, en el caso particular) que padece los efectos del conflicto armado.

El Figura 10 se centra en la tasa bruta de escolaridad en secundaria y la tasa de deserción escolar en todos los niveles. Se observa que la diferencia entre el Valle de Aburrá y las demás subregiones cobra gran importancia en este aspecto puesto que para ambas variables se presenta una situación contraria, es decir, mientras la tasa de escolaridad es notoriamente alta en el área metropolitana y baja por fuera de ella, la tasa de deserción escolar es baja únicamente en los municipios del Valle de Aburrá y algunos aledaños a esta subregión.

Figura 10: Tasa bruta de escolaridad en secundaria y tasa de deserción escolar

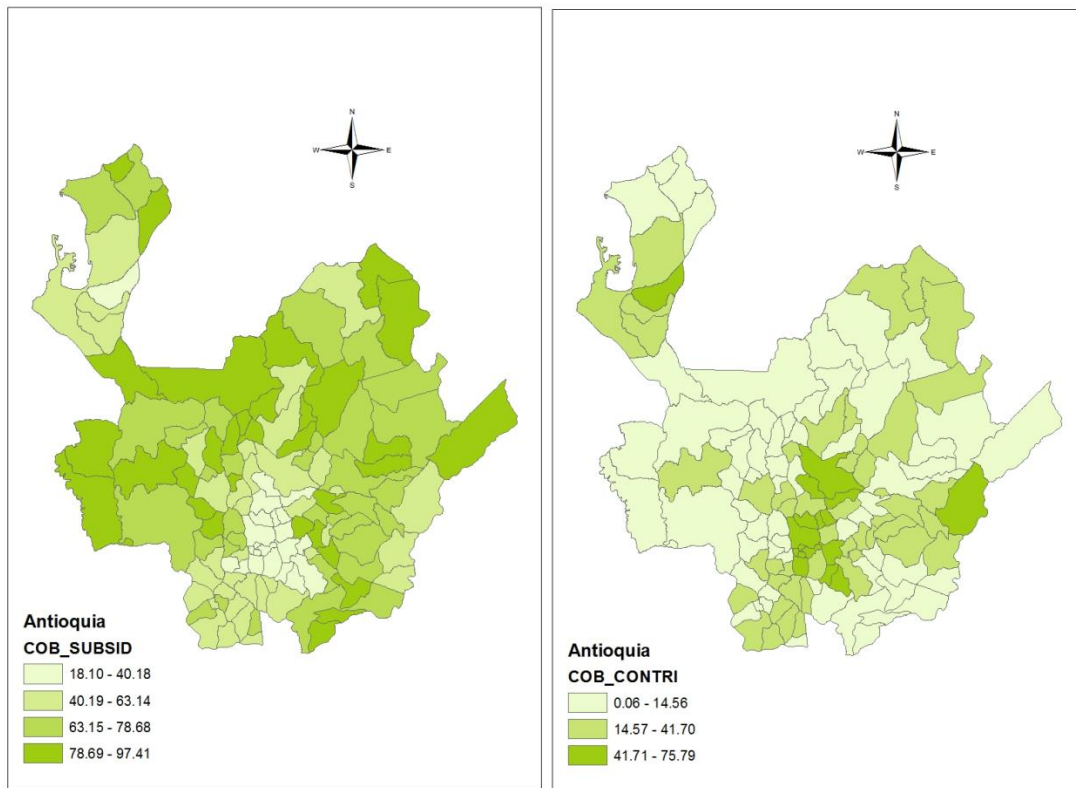


Fuente: Elaboración propia con datos DAP de Antioquia, 2010.

Por otro lado, en cuanto a la salud se analizan en el Figura 11 la cobertura del régimen subsidiado y del régimen contributivo en el Departamento. En este caso, la situación sí parece ser completamente inversa: se observa que la cobertura del régimen subsidiado parece ser muy alta en todo el Departamento exceptuando al Valle de Aburrá y algunos municipios aledaños a éste, mientras que la cobertura del régimen contributivo es alto únicamente en algunos municipios de ésta subregión y algunos más.

Lo anterior es importante puesto que, dado que en el ejercicio que se realizará no considera el Valle de Aburrá, el efecto que pueda observarse de los GAML sobre estos indicadores estará supeditado a la dinámica aquí planteada.

Figura 11: Cobertura de los regímenes subsidiado y contributivo de salud



Fuente: Elaboración propia con datos del DAP de Antioquia, 2010.

Dada esta contextualización, tanto de la evolución de la presencia de GAML en Antioquia en años recientes, como de la situación social (particularmente de los indicadores a estudiar) del Departamento durante el 2005, se pasará ahora a presentar el ejercicio empírico que corrobora el efecto de los GAML sobre los indicadores planteados.

6. APROXIMACIÓN EMPÍRICA

En los ejercicios que se realizaron, tanto a nivel agregado (municipios) como a nivel de individuos, se estimaron una gran cantidad de regresiones¹⁹, utilizando diferentes definiciones de la variable independiente y agrupando las variables dependientes según las diferentes categorías que estuvieran disponibles en cada caso (homicidios y desplazamiento, educación y salud, en el análisis agregado; y educación y salud en el análisis individual). Para capturar el efecto planteado, es decir, las repercusiones del accionar de los GAML sobre el desempeño de algunos indicadores sociales en el año 2005, además de las variables contemporáneas, se construyeron variables de persistencia del conflicto, que indicaran los municipios en los que las acciones de los GAML habían sido recurrentes durante varios años. Además de brindarle robustez a las estimaciones, estas variables de persistencia tienen el beneficio de que son completamente exógenas, lo cual permite evitar problemas de endogeneidad en el análisis²⁰.

Unido a esto, el conocimiento de las autoridades civiles y policiales sobre el conflicto armado en Antioquia, permite inferir que el problema en Medellín y su área metropolitana es muy diferente al que se presenta en los otros municipios, donde el conflicto es menos urbano y da lugar al ejercicio de actividades armadas como retenes, emboscadas, contactos con la fuerza pública, entre otros aspectos que son los que finalmente se tienen en cuenta en este trabajo. Por este motivo, de los 125 municipios que componen el departamento de Antioquia, se excluyeron los 10 que hacen parte de la subregión del Valle de Aburrá y se realizaron las estimaciones con los restantes. Se procedió pues con esta base de datos reducida, que es la que da lugar al análisis que se planteó desde un principio. Investigar lo que sucede en Medellín y los municipios aledaños, puede convertirse en una aproximación adicional al problema que debe ser analizada en otro estudio y siguiendo un enfoque diferente.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios econométricos realizados y se analiza la verificación de la hipótesis

¹⁹ Todas las regresiones se realizaron utilizando la metodología de White (Cameron y Trivedi, 2005) para la corrección de heterocedasticidad.

²⁰ Además de la variable binaria de acciones armadas en 2005 (1 si hubo algún acto criminal y 0 en otro caso denominada GAML05) de la base principal por municipios, se crearon variables de persistencia de 2, 3, 5 y 8 años, a partir de los datos de la base de datos del CEDE referenciada anteriormente. Se podría esperar que estas variables sean exógenas, pues es improbable que los indicadores sociales de hoy determinen la presencia de grupos armados de hace algunos años. De los resultados obtenidos, se optó por usar la persistencia en 5 años (PERS. 5 AÑOS) por ser la que mejor se ajustaba a los resultados esperados. Las demás regresiones se excluyeron del trabajo por limitación de espacio.

planteada de que el accionar de los GAML tiene efectos negativos sobre el desarrollo social en Antioquia.

6.1 Efectos Agregados

El primer ejercicio correspondió a la estimación de los efectos de las acciones de los GAML sobre los indicadores sociales que se tenían disponibles a nivel de municipios. Para conocer la intuición del problema, primero se estimaron por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) regresiones iniciales de las variables sociales en función únicamente de las variables de conflicto. Luego, de la escasa información disponible, se seleccionaron algunos controles para incluirlos en estas estimaciones, con el fin de capturar los efectos de otras variables sobre las explicadas. Seguidamente, utilizando la misma metodología, se incluyeron restricciones adicionales que permitieron controlar por efectos fijos de subregión²¹. En este punto es importante aclarar en cuanto a los efectos fijos que, aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que específicamente se está controlando, se están teniendo en cuenta las características propias de cada subregión que podrían influir sobre los indicadores sociales. Así, se excluyen otros efectos adicionales a los que realmente se quieren analizar. Finalmente, una vez más por MCO, se estimaron regresiones con controles y efectos fijos de subregión, siendo estas las regresiones más restrictivas y las que darán lugar al análisis. De esta manera, la estructura general de las estimaciones es la siguiente (donde Y son las diferentes variables sociales, α representa el intercepto, β el coeficiente de la variable que indica presencia de grupos armados en el municipio, θ el coeficiente de las variables de control, γ es el coeficiente de los efectos fijos y u es el término de error):

$$Y_i = \alpha + \beta GAML_i + \theta X + \sum_{i=1}^7 \gamma EF_i + u_i$$

²¹ El departamento de Antioquia, en su división administrativa en 9 subregiones, ha orientado sus planes de desarrollo en políticas subregionales que hacen que los municipios tengan características muy similares de acuerdo a la subregión a la que pertenecen. Así, los efectos fijos subregionales capturan estas características no observables particulares de los municipios que pertenecen a cada una.

A) Homicidio y desplazamiento

Cuadro 1. Efectos agregados en homicidio y desplazamiento

Tasa de Homicidios				
	OLS	OLS CM	OLS EF	OLS CM+EF
GAML05	21.573*** [5.611]	17.384*** [4.691]	19.601*** [5.258]	12.967*** [4.411]
PERS. 5 AÑOS	33.149*** [6.433]	23.142*** [4.896]	27.162*** [7.122]	16.270*** [5.601]
Desplazados				
	OLS	OLS CM	OLS EF	OLS CM+EF
GAML05	331.352*** [71.350]	330.980*** [80.514]	268.225*** [58.267]	259.631*** [72.020]
PERS. 5 AÑOS	380.351*** [95.359]	372.050*** [91.171]	383.493*** [88.418]	363.783*** [91.524]

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia, 2010.

Los efectos más robustos que se encontraron, se presentaron en aquéllos indicadores que evidencian la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la libertad misma, ésta última en el sentido de la expulsión forzada del lugar en el que se habita. Es decir, los efectos sobre la tasa de homicidios por cien mil habitantes (pcmh) y sobre el número de desplazados por municipio expulsor. La evidencia indica que en el año 2005, en los municipios donde la presencia de GAML fue persistente entre 2001 y ese año, se presentaron 16 homicidios pcmh y 364 desplazados más que en aquéllos municipios donde el accionar armado no fue persistente (ver Cuadro 1).

Estos dos resultados, sin menospreciar los demás, son la evidencia más fehaciente de las consecuencias devastadoras que ha tenido la presencia activa de grupos subversivos y paramilitares sobre la sociedad antioqueña. Se trata de una pérdida absurda de vidas humanas y del inicio de un problema social de enormes magnitudes como el que genera el desplazamiento forzado.

Con respecto a los homicidios, además de la reprochable discreción de acabar con la vida de nuestros semejantes a través de atentados terroristas, asesinatos selectivos, masacres, entre otros, debe tenerse en cuenta un elemento adicional y es la pérdida de fuerza laboral y de individuos potencialmente innovadores y productivos para la economía antioqueña. Esto, unido a los efectos psicológicos²²

²² Si bien se acepta que dichos efectos psicológicos son de gran importancia, analizarlos sobrepasa los objetivos de este trabajo y las capacidades de sus autores.

por la pérdida de familiares o amigos cercanos, son elementos que clarifican el deterioro social producido por los grupos armados.

Con respecto al fenómeno del desplazamiento, se trata de una vulneración directa a los derechos de propiedad y a la libertad de asentarse donde la persona se siente complacida o donde su familia se ha desarrollado tradicionalmente. Además de violar esa libertad y ese derecho, los GAML generan un caos social que se traduce en grandes concentraciones de individuos en las ciudades, aumento del desempleo y deterioro de las condiciones de vida, entre otros efectos. Los individuos expulsados de sus tierras pierden lo poco que tienen y son obligados a desplazarse a lugares donde no son recibidos en las mejores condiciones y donde la situación de pobreza se agrava en la medida que se les dificulta conseguir los medios para subsistir.

B) Educación

Cuadro 2. Efectos agregados en educación

Tasa de Deserción Escolar				
	OLS	OLS CM	OLS EF	OLS CM+EF
GAML05	1.098*	-0.128	1.446**	0.354
	[0.667]	[0.548]	[0.638]	[0.554]
PERS. 5 AÑOS	1.157	0.843	2.336***	1.625**
	[0.724]	[0.621]	[0.843]	[0.755]
Tasa Bruta de Educación en Secundaria				
	OLS	OLS CM	OLS EF	OLS CM+EF
GAML05	-9.690***	-5.385*	-11.651***	-4.625
	[3.407]	[3.095]	[3.759]	[3.094]
PERS. 5 AÑOS	-6.549*	-7.554**	-9.944***	-6.385**
	[3.395]	[3.085]	[3.480]	[2.966]

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia, 2010.

En cuanto a indicadores de educación, los resultados muestran que en aquellos municipios en los que la presencia de GAML fue persistente en los años mencionados, la tasa de deserción escolar en todos los niveles educativos durante el 2005 fue 1.625 puntos mayor que en los municipios que no registraron tal persistencia. A su vez, en los municipios que registraron tal persistencia, la tasa bruta de educación en secundaria fue 6.385 puntos menor que en los municipios donde no hubo acciones armadas o donde éstas fueron aisladas. Estos dos resultados ilustran un problema muy grave que ha generado el accionar de estos grupos armados sobre la sociedad antioqueña y es la de frenar el acervo de

capital humano de los jóvenes. Este efecto se produce a través del incentivo a inmiscuirse en actividades ilegales al hacerlas ver más lucrativas y, además, a través de la intimidación, la cual les impide a los individuos llevar una vida normal y cumplir con sus actividades cotidianas por miedo a lo que pueda pasar con sus vidas (ver Cuadro 2).

Por su parte, en la tasa bruta de escolarización en primaria no se registraron resultados estadísticamente significativos, sin embargo, como se verá más adelante, el análisis individual sí arroja resultados válidos en este sentido.

C) Salud

Cuadro 3. Efectos agregados en salud

Cobertura del Régimen Subsidiado de Salud				
	OLS	OLS CM	OLS EF	OLS CM+EF
GAML05	9.619*** [3.302]	4.025 [2.710]	8.802** [3.565]	4.117 [2.939]
PERS. 5 AÑOS	8.868*** [3.412]	6.977** [2.715]	10.902*** [4.081]	9.432*** [3.241]
Cobertura del Régimen Contributivo de Salud				
	OLS	OLS CM	OLS EF	OLS CM+EF
GAML05	-5.056* [2.766]	-0.552 [2.349]	-6.308** [3.032]	-1.104 [2.602]
PERS. 5 AÑOS	-2.446 [2.698]	-1.373 [2.310]	-6.057* [3.664]	-3.005 [2.765]

*** p<0.01, ** p<0.

Fuente: Elaboración propia, 2010.

En salud, los resultados indican que la persistencia del accionar armado de los grupos ilegales en Antioquia tuvo efectos sobre la cobertura en el régimen subsidiado, mas no sobre la cobertura del régimen contributivo. Este último resultado puede deberse a que, como se pudo observar en el análisis descriptivo, por fuera del Valle de Aburrá la tasa de cobertura en el régimen contributivo es notoriamente baja, lo cual, al excluir dicha subregión del análisis, pudo afectar el resultado estadístico. Por su parte, el resultado encontrado en la tasa de cobertura del régimen subsidiado fue contrario al que se esperaba, pues los municipios con persistencia de acciones terroristas entre 2001 y 2005 tuvieron 9.432 puntos más de cobertura en este último año, que aquellos municipios donde el conflicto no fue persistente (ver Cuadro 3).

En cuanto a lo anterior, se podría inferir que este resultado está explicado en parte por el hecho de que cuando se planteó el sistema de los regímenes de salud, se hizo con la pretensión de que el mayor crecimiento económico permitiera el paso de las personas del régimen contributivo al régimen subsidiado. Como es bien sabido, no hubo el anhelado crecimiento económico. Además, en los lugares en donde el conflicto armado ha sido más crudo (como lo son los municipios antioqueños), el desarrollo económico se ha dificultado a causa del mismo. Por este motivo, se considera que la intensidad del conflicto ha impedido que las personas aumenten sus ingresos a nivel suficiente para pasarse de régimen.

En este sentido, los resultados obtenidos evidencian que ante la persistencia del conflicto armado, los municipios tenderían a aumentar la cobertura del régimen subsidiado puesto que sus habitantes son incapaces de pasarse al contributivo²³.

6.2 Efectos Individuales

A manera de ejercicio de robustez, para corroborar los efectos encontrados en el análisis agregado por municipio, se realizaron estimaciones a nivel individual para medir el impacto que tiene la presencia activa de GAML sobre la capacidad de las personas de acceder a los servicios de educación y salud. La razón para hacer este ejercicio es que las medidas de bienestar social aplicadas anteriormente son de carácter agregado, pero finalmente el efecto que conlleva el deterioro social medido a través de estos indicadores es percibido por los individuos, por lo cual, se debe conocer ese efecto directo. Dicho efecto se mide sobre el promedio de los individuos de manera que los resultados se entienden como cambios marginales en la probabilidad de que el evento (variable social) ocurra, por lo cual, a pesar de ser variables dicotómicas, no es necesario utilizar otros modelos como Logit o Probit²⁴. Esto se fundamenta además en el hecho de que estos modelos se utilizan para predecir probabilidades, mientras que en este caso se pretende únicamente encontrar el efecto de las variables explicativas sobre las explicadas. (En este sentido, véase Cameron y Trivedi, 2005.).

Es claro que para las variables de homicidios y desplazados sólo serían afligidos de manera directa (en un nivel objetivo y sin entrar en las discusiones psicológicas

²³ La preponderancia del régimen subsidiado por fuera del Valle de Aburrá puede observarse en el análisis descriptivo realizado anteriormente.

²⁴ En cuanto al uso del Modelo de Probabilidad Lineal (MPL), Amemiya (1981) argumenta que dicho modelo funciona bastante bien para la predicción de probabilidades entre 0.1 y 0.9. En este caso, el supuesto básico es que las variables independientes se distribuyen normal (Maddala, 1983; Cameron y Trivedi, 2005).

de los efectos del conflicto armado) quienes hayan sido víctimas de los mismos; pero éstas personas, o bien no residirían en el municipio cuyos indicadores sociales se quieren analizar a través de su afectación, o bien están muertos. Por lo anterior, se analizará el efecto de los GAML sobre algunos indicadores que miden el acceso a la educación primaria, secundaria y media, y la posibilidad de terminar cada etapa a tiempo; además de estos efectos en educación, se estudiará el efecto sobre indicadores de salud como la posibilidad de que una persona esté afiliada al régimen subsidiado y al régimen contributivo.

Como se mencionó anteriormente, al igual que para el ejercicio por municipios, para el análisis individual se ha excluido a los habitantes del Valle de Aburrá puesto que la dinámica del conflicto allí depende de diferentes motivaciones y genera diferentes efectos (sociales o de otro tipo) sobre la población. Además, como el estudio individual se hace dentro del contexto del análisis por municipio, es importante que quienes se incluyan en la muestra sean casos representativos de sus respectivos municipios. Por lo anterior, se ha excluido del análisis a quienes han migrado en los últimos 5 años.

Al igual que en el caso agregado, para analizar los efectos individuales se realizaron estimaciones por MCO usando tanto la variable contemporánea de presencia activa de GAML como la variable de persistencia en 5 años de la misma. Además de la regresión simple (variables sociales sólo en función de las variables de conflicto), se estimó también el modelo usando controles individuales como edad, sexo, etnia, estar o no activo y educación del jefe de hogar, y se usaron efectos fijos, en este caso, correspondientes a las características municipales. Los resultados analizados son los que corresponden a las especificaciones más restrictivas, es decir, el efecto de la persistencia en 5 años de la presencia activa de GAML teniendo en cuenta los controles individuales y los efectos fijos municipales. Según esto, la especificación general sería (donde Y son las diferentes variables sociales, α es el intercepto, β es el coeficiente de la variable de conflicto, θ es el coeficiente de los controles individuales, γ es el coeficiente de los efectos fijos, u es el término de error, m son los municipios e i son los individuos):

$$Y_i = \alpha + \beta GAML_m + \theta X_i + \sum_{m=1}^{114} \gamma EF_m + u_i$$

A) Educación

Cuadro 4. Efectos individuales en educación

Asistencia niños (6 a 10 años)				
	OLS	OLS CI	OLC EF	OLS CI+EF
GAML05	-0.042*** [0.001]	-0.031*** [0.001]	-0.088*** [0.010]	0.282*** [0.031]
PERS 5 AÑOS	-0.025*** [0.001]	-0.021*** [0.001]	-0.088*** [0.010]	-0.058*** [0.014]
Asistencia jóvenes (11 a 20 años)				
	OLS	OLS CI	OLC EF	OLS CI+EF
GAML05	-0.039*** [0.002]	-0.027*** [0.001]	-0.175*** [0.022]	-0.116*** [0.017]
PERS 5 AÑOS	-0.027*** [0.001]	-0.015*** [0.001]	-0.169*** [0.023]	0.061** [0.026]
Terminar primaria a tiempo				
	OLS	OLS CI	OLC EF	OLS CI+EF
GAML05	-0.043*** [0.001]	-0.033*** [0.001]	-0.115*** [0.016]	0.086*** [0.022]
PERS 5 AÑOS	-0.019*** [0.001]	-0.014*** [0.001]	-0.117 [454.420]	-0.092*** [0.016]
Terminar secundaria básica a tiempo				
	OLS	OLS CI	OLC EF	OLS CI+EF
GAML05	-0.017*** [0.002]	-0.012*** [0.002]	-0.139*** [0.027]	-0.118*** [0.027]
PERS 5 AÑOS	0.003* [0.002]	0.004** [0.002]	-0.139*** [0.027]	-0.118*** [0.027]
Terminar media vocacional a tiempo				
	OLS	OLS CI	OLC EF	OLS CI+EF
GAML05	-0.014*** [0.002]	-0.010*** [0.002]	-0.008 [0.019]	0.042** [0.017]
PERS 5 años	-0.000 [0.002]	0.002 [0.002]	-0.008 [0.019]	0.042** [0.017]

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia, 2010.

El efecto sobre la educación se midió mediante 5 variables. La primera es la probabilidad promedio de asistir a la escuela de los niños (6 a 10 años), para la cual se encontró que la persistencia de las acciones de los GAML en los municipios hace que esta se reduzca en 0.058. Algo similar sucede con la probabilidad de asistencia de los jóvenes (11 a 20 años) puesto que, aunque la

persistencia de los GAML indica un efecto positivo, todas las otras regresiones evidencian una relación negativa entre el conflicto y la asistencia.

La siguiente variable analizada es la capacidad de los estudiantes de terminar a tiempo sus estudios primarios; en este sentido, se encuentra que la persistencia de las acciones terroristas tiene una relación negativa de 9.2% con esta variable. Asimismo, se analiza la capacidad de los estudiantes de terminar sus estudios secundarios a tiempo y se encuentra que la persistencia del conflicto reduce la capacidad (probabilidad promedio) de terminar secundaria a tiempo en 11.8% por ciento.

Finalmente, sorprende el resultado sobre la capacidad de los estudiantes para terminar a tiempo su educación media vocacional, puesto que el efecto es positivo en 4.2%. No se encuentra explicación intuitiva a esta relación; justificarla formalmente puede ser un tema interesante de análisis para otro estudio. Para el objetivo de este trabajo, basta con decir que no existe un efecto negativo sobre esta variable, si bien el resultado sobre el acceso a la educación es claramente negativo (ver Cuadro 4).

B) Salud

Cuadro 5. Efectos individuales en salud

Afiliación del régimen subsidiado de salud				
	OLS	OLS CI	OLS EF	OLS CI+EF
GAML05	0.083*** [0.001]	0.073*** [0.001]	0.316*** [0.010]	0.277*** [0.013]
PERS 5 AÑOS	0.070*** [0.001]	0.069*** [0.001]	0.316*** [0.010]	0.138*** [0.013]
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
Afiliación del régimen subsidiado de salud				
	OLS	OLS CI	OLS EF	OLS CI+EF
GAML05	-0.055*** [0.001]	-0.050*** [0.001]	-0.315*** [0.010]	0.094*** [0.005]
PERS 5 AÑOS	-0.021*** [0.001]	-0.021*** [0.001]	-0.315*** [0.010]	-0.126*** [0.012]
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los efectos sobre la capacidad de acceder a los servicios de salud de los individuos, se encuentra que aunque la probabilidad promedio de pertenecer al

régimen subsidiado aumenta con la presencia de GAML, en el caso del régimen contributivo dicha probabilidad disminuye. Lo anterior es coherente con los resultados hallados en el ejercicio agregado, aunque en este caso el resultado sobre la afiliación al régimen contributivo sí es estadísticamente significativo.

Respecto al régimen subsidiado, se observa que ante la persistencia del conflicto la probabilidad promedio de pertenecer a este régimen aumenta en 13.8%. Lo anterior corrobora los resultados obtenidos en las regresiones municipales, siendo nuevamente contrario a lo que se esperaba a priori. Paralelamente, la probabilidad promedio de pertenecer al régimen contributivo se reduce ante la persistencia del accionar de los GAML en 12.6% y, como ya se estableció, los efectos individuales cumplen la condición de ser estadísticamente significativos a diferencia de los resultados municipales, lo cual corrobora el sentido de dichos resultados (ver Cuadro 5).

7. ALCANCES Y LIMITACIONES

Si bien se encontraron diversos resultados que favorecieron el contraste de la hipótesis de investigación, debe haber claridad en las limitaciones que se presentaron en este estudio. Como se mencionó con anterioridad, los datos fueron una restricción evidente para la realización de un análisis empírico más completo y con un horizonte temporal más extenso. Es decir, la escasez de información estadística a nivel del departamento de Antioquia no favoreció un análisis más amplio en cuanto a indicadores sociales, ni permitió que se pudiera efectuar una exploración histórica de los efectos de las acciones de los GAML sobre la sociedad antioqueña.

Adicionalmente, la insuficiencia de datos también se convirtió en un elemento disuasorio para la elaboración de una aproximación empírica más completa, pues diferentes metodologías que hubieran podido ser aplicadas como Diferencias en Diferencias o Variables Instrumentales requerirían de información no disponible. Esto sin contar otras metodologías de evaluación de impacto como Propensity Score Matching que, más que cierta información específica, requería de una buena cantidad de datos, que como ya se mencionó no se tenía.

8. CONCLUSIONES

Este trabajo buscó medir el efecto que ha tenido la presencia activa de Grupos Armados al Margen de la Ley sobre el desarrollo social de los habitantes de Antioquia, este último, medido a través de la tasa de homicidios, el número de desplazados, variables de acceso a la educación y de acceso a la salud.

Los resultados encontrados en el análisis efectuado demuestran que las acciones terroristas de GAML han tenido efectos devastadores sobre la sociedad antioqueña. Con pocas excepciones, se encontró lo esperado y ambos análisis (agregado e individual) son coherentes entre sí. Se resalta particularmente que los efectos más robustos se encuentran en los atentados contra la vida y la libertad de asentamiento, es decir, homicidios y desplazamiento; además, los efectos sobre educación son mayoritariamente negativos, mientras que sobre la afiliación a los regímenes de salud son heterogéneos, en tanto que la presencia de los GAML afecta negativamente el régimen contributivo, pero positivamente el régimen subsidiado.

Así, el desarrollo social de la comunidad se ve menguado por actos como la toma de poblaciones, la activación de artefactos explosivos, los retenes ilegales, entre otros, que afectan directamente, o a través de la intimidación, el acceso de las personas a ciertas condiciones que están encaminadas a mejorar su calidad de vida. Se trata de una problemática en la que se vulnera desde el propio derecho a la vida, hasta la posibilidad de acceder a servicios que incrementan el capital humano.

En este sentido, Corredor (2001) plantea que el conflicto armado y sus consecuencias en términos de destrucción de vidas humanas, desplazamiento forzado y ataques a la infraestructura productiva del país, se convierten en el principal factor en contra de la distribución de los beneficios del crecimiento económico para el conjunto de la sociedad colombiana. A pesar de que en este trabajo no se estudió el impacto del conflicto sobre la infraestructura productiva, los efectos encontrados sobre los indicadores analizados en el departamento de Antioquia evidencian las implicaciones del accionar armado de los grupos ilegales sobre la sociedad. No sólo se trata de un problema de distribución de los productos del crecimiento económico, sino también de la dificultad en la formación del capital humano y las posibles trampas de pobreza que se generarían con el problema del desplazamiento.

Las implicaciones directas de lo encontrado en este estudio se trasladan a la toma de decisiones de política, en el sentido de poner todo el empeño en neutralizar los GAML a través de la acción de la fuerza pública del Estado, y permitir así un apoderamiento del territorio y consecuentemente, la garantía mínima del derecho a la vida junto con una política social más contundente. En este sentido, Buvinic et al. (2005) consideran que la violencia representa costos monetarios directos para los gobiernos, los cuales podrían utilizarse en proyectos de educación y salud, por lo que la política pública encaminada a reducir la violencia es un imperativo para los dirigentes del mundo, y en este caso particular, para los de Antioquia.

Para lo anterior es importante establecer que en aquel lugar en el que existan rentas (lícitas o ilícitas, pero especialmente estas últimas) por explotar, habrá lugar para el surgimiento de grupos ilegales que busquen apropiarse de dichas rentas. Por tanto, la acción del Estado debe enfocarse en hacer costosa la actividad criminal, en el sentido de castigar con todo el rigor a quienes trasgredan la ley, lo cual sólo es posible bajo una coerción y una justicia monopolizadas por el Gobierno. Lamentablemente ante situaciones extremas de conflictos armados internos los países, y particularmente, sus habitantes, deben realizar sacrificios extraordinarios para mitigar los nocivos efectos del conflicto entre lo cual se incluye la financiación del mismo mediante mayores tasas impositivas. (Caballero, 2003).

En síntesis, este trabajo ha establecido el nocivo efecto que tienen los GAML sobre los indicadores sociales en el departamento de Antioquia. Dada la magnitud del deterioro social, reducir dichos efectos y reparar a las personas que han sido víctimas de los mismos, han sido y serán en el futuro previsible, las tareas más importantes para las autoridades departamentales.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Abadie, A. y Gardeazabal, J. (2003). The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1): 113–132.
- Alderman, H., Hoddinott, J., y Kinsey, B. (2004). Long Term Consequences Of Early Childhood Malnutrition. *Households in Conflict Network (HiCN) Working Papers*, 09.
- Álvarez, S., y Rettberg, A. (2008). Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano. *Colombia Internacional*-No. 67-, pp. 14-37.
- Amemiya, T. (1981), “Qualitative Response Models: A Survey”, *Journal of Economic Literature*, 1483–1536.
- Anselin, L. (1995). “Local Indicators of Spatial Associatio”, *LISA. Geographical Analysis* 27, 93-115.
- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 1968, vol. 76, pages 169.
- Bejarano, J.A., Echandía, C., Escobero, R., y Queruz, E.L. (1997). *Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales*. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia – FONADE.
- Blattman, C., y Miguel, E. (2009). *Civil War*. NBER Working Paper Series(14801).
- Bonilla, L. (2009). Revisión de la literatura económica reciente sobre las causas de la violencia homicida en Colombia. *Documentos de Trabajo sobre Economía regional* No. 114. Banco de la República de Colombia.
- Buvinic, M., Morrison, A., y Orlando, M. B. (2005). *Violencia, crimen y desarrollo social en América Latina y el Caribe*. *Papeles de Población*, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 167-214.
- Caballero, C. (2003). *La Estrategia de Seguridad Democrática y la Economía Colombiana: Un Ensayo Sobre la Macroeconomía de la Seguridad*. *Borradores de Economía* 234. Banco de la República de Colombia.
- Camacho, A. (2008). Stress and Birth Weight: Evidence from Terrorist Attacks. *American Economic Review: Papers y Proceedings* 2008, 511–515.

Cameron, C. & Trivedi, P. (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press, New York.

Cohen, M. A., y Rubio, M. (2007). *Violence and Crime in Latin America*. San José, Costa Rica.

Colletta, N. J., y Cullen, M. L. (2000). *The Nexus Between Violent Conflict, Social Capital and Social Cohesion: Case Studies from Cambodia and Rwanda*. Social Capital Initiative Working Paper Series(23).

Collier, P. (1999). *On the Economic Consequences of Civil War*. *Oxford Economic Papers*(51), 168-83.

Collier, P., Elliot, L., Hegre, H., Hoeffler, A., Reynal-Querol, M. y Sambanis, N. (2003). *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. World Bank and Oxford University Press. Washington, D.C.

Corredor, C. (2001). *Principales problemas socioeconómicos relacionados con el conflicto interno de Colombia*. En A. Martínez, *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-FCE-.

Cubides, F., Olaya, A. C., y Ortiz, C. (1998). *La violencia y el municipio colombiano: 1980-1997*. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia-Colección CES.

Díaz, A.M, y Sánchez, F. (2003). *Geografía de los Cultivos Ilícitos y conflicto Armado en Colombia*. Documento CEDE 2004-18, Universidad de los Andes.

Echandía, C. (1999). *Evolución y expansión de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia*. En M. Deas, y M. V. Lorente, *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: Norma.

Echeverry, J. C., Salazar, N., y Navas, V. (2001). *El conflicto colombiano en el contexto internacional*. En A. Martínez, *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-FCE-.

Fuentes, J.A. (2005). *Violent Conflict and Human Development in Latin America: The Cases of Colombia, El Salvador and Guatemala*. PNUD Human Development Report 2005. Guatemala.

Gaitán, F., y Deas, M. (1995). *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: FONADE-DNP, Tercer Mundo Editores.

Gaviria, A. (2000). Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: The Case of Colombia. *Journal of Development Economics*, Elsevier, vol. 61(1), pages 1-25.

Gaviria, A., Medina, C., Morales, L., y Núñez, J. (2008). The Cost of Avoiding Crime: The Case of Bogotá. *Borradores de Economía*, Banco de la República de Colombia(508).

Gaviria, A., y Vélez, C.E. (2001). Who Bears the Burden of Crime in Colombia?. *Informes de Investigación de Fedesarrollo* 003776.

Giménez, G. (2007). Violence and Growth in Latin America. *Economic Analysis Working Papers (EAWP)*, Colexio de Economistas de La Coruña, Spain and Fundación Una Galicia Moderna, vol. 6, pages 1-34

Ghobarah, H.A., Huth, P. y Russett, B. (2003). Civil Wars Kill and Maim People-Long after the Shooting Stops. *The American Political Science Review*, Vol. 97, No. 2 (May, 2003), pp. 189-202.

Granada, S. M. (2008). Caracterización y contextualización de la dinámica del desplazamiento forzado interno en Colombia 1996-2006. *Documentos de CERAC*(12).

Hess, G. D. (2003). The Economic Welfare Cost of Conflict: An Empirical Assessment. *CESifo Working Papers*(852).

Hoeffler, A., y Reynal-Querol, M. (2003). Measuring the Costs of Conflict. *Centre for the Study of African Economies Working Paper*, Mimeo.

Holmes, J. S., Gutiérrez de Piñeres, S. A., y Curtin, K. M. (2006). Drugs, Violence and Development in Colombia: A Department Level Analysis. *Latin American Politics and Society*, 48(3), 157-184.

Ibáñez, A.M., y Querubín, P. (2004). Acceso a Tierras y Desplazamiento Forzado en Colombia. *Documento CEDE* 2004-23. Universidad de los Andes.

Ibáñez, A. M., y Vélez, C. E. (2005). Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and the Welfare Losses of Displacement in Colombia. *Documentos CEDE*(2005-35).

Justino, P. (2008). Poverty and Violent Conflict: A Micro-Level Perspective on the Causes and Duration of Warfare. *MICROCON Research Working Paper*(6).

Kurtenbach, S. (2005). *Análisis del Conflicto en Colombia*. Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá.

Maddala, G. (1983). *Limited-Dependent and Qualitative Variables in Economics*. Cambridge, UK, Cambridge University Press.

Ministerio de Defensa Nacional. (2007). *Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*. Recuperado el 15 de Marzo de 2010, de http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/Politica_de_Consolidacion_de_la_Seguridad_Democratica.pdf.

Montenegro, A., y Posada, C. E. (2001). *La violencia en Colombia*. Bogotá: Alfaomega.

Parra, C.E. (1998). *Determinantes de la Inversión en Colombia: Evidencia sobre el capital humano y la violencia*. Archivos de Macroeconomía 084 –DNP-.

Pizarro, E., y Valencia, L. (2009). *Le Ley de Justicia y Paz*. Bogotá: Norma-Revista Semana.

Pottebaum, D., y Kanbur, R. (2004). *Civil war, public goods and the social wealth of nations*. *Oxford Development Studies*, 459 - 484 .

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD-. (2003). *Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia: El conflicto, callejón con salida*. Bogotá.

Ra, S., y Singh, B. (2005). *Measuring The Economic Costs Of Conflict: The effect of declining development expenditures on Nepal's economic growth*. *NRM Working Papers*(2).

Rangel, A. (1999). *Las FARC-EP: una mirada actual*. En M. Deas, y M. V. Llorente, *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: Norma.

Restrepo, J.A. (2001). *Análisis económico de conflictos internos*. Documento preparado para la Fundación Ideas para la Paz.

Revista Dinero (2010). *Premio Juan Luis Londoño para Ana María Ibáñez*. Recuperado el 10 de Septiembre de 2010, de [Dinero.com: http://www.dinero.com/actualidad/economia/premio-juan-luis-londono-para-ana-maria-ibanez_75168.aspx](http://www.dinero.com/actualidad/economia/premio-juan-luis-londono-para-ana-maria-ibanez_75168.aspx).

Reyes, A. (2009). *El conflicto armado por el poder del territorio*. En A. Reyes, *Guerreros y Campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Norma.

Reyes, A. (2009a). *Orígenes y expansión del paramilitarismo*. En A. Reyes, *Guerreros y Campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Norma.

Rocha, R.E., y Martínez, H. (2003). Pobreza, crimen y crecimiento regional en Colombia. Archivos de Economía 230 –DNP-.

Rubio, M. (1997). Los Costos de la Violencia en Colombia. PAZ PUBLICA Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia Universidad de los Andes (7).

Rubio, M. (1997a). Perverse Social Capital: Some Evidence from Colombia. Journal of Economic Issues, Vol. 31, No. 3.

Rubio, M. (1998). La Violencia en Colombia: Dimensiones y políticas de control. Documento de Trabajo de la Red de Centros de Investigación. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.

Sánchez, F., Díaz, A. M., y Formisano, M. (2003). Conflicto, Violencia y Actividad Criminal en Colombia: Un análisis espacial. Documento CEDE(2003-05). Universidad de los Andes .

Sánchez, F., y Díaz, A. M. (2005). Los Efectos del Conflicto Armado en el Desarrollo Social Colombiano, 1990-2002. Documentos CEDE(2005-58). Universidad de los Andes.

Sánchez, F. y Núñez, J. (2001). Determinantes del crimen violento en un país altamente violento. Documento CEDE, Universidad de los Andes .

Trujillo, E., y Badel, M. E. (1998). Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996. Archivos de Macroeconomía DNP(76).

Urdinola, P. (2004). Could Political Violence Affect infant Mortality?: The Colombian Case. Coyuntura Social FEDESARROLLO, 31, 63-79.

USAID (2005). Conflict, Poverty, Inequality, and Economic Growth. Pro-poor Growth: Tools & Key Issues for Development Specialists.

Vélez, M. A. (2002). FARC-ELN: Evolución y expansión territorial. Tesis de pregrado no publicada, Universidad de los Andes .